

Informe Sombra

Análisis de la Situación del ODS4 en Honduras del periodo 2015-2023

en el marco del proyecto “Alzando la Voz de la Sociedad Civil por una educación pública gratuita en Honduras periodo 2022-2023”, financiado con fondos del componente operativo No 1, EDUCACION en VOZ ALTA (EVA) de la GPE

RESUMEN EJECUTIVO	4
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO	6
EDUCACIÓN EN VOZ ALTA (EVA)	6
CONTEXTO GENERAL	7
HONDURAS Y LOS ODS	8
SOBRE ESTE ESTUDIO	10
OBJETIVOS	10
ALCANCE, METODOLOGÍA Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO	11
TESTIMONIOS O RESULTADOS DE ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES DEL SECTOR	12
LITERATURA ESTADÍSTICAS, INFORMES, ENTRE OTROS DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS	13
PARTE 1	13
¿CUAL ERA LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN HONDURAS EN EL AÑO 2015?	13
COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA EN PRIMARIA Y SECUNDARIA.	13
ACCESO Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA	15
ACCESO IGUALITARIO A UNA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR	16
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES	18
EQUIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA MUJERES, NIÑAS Y GRUPOS VULNERABLES	20
NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y COMPETENCIAS EN ARITMÉTICA BÁSICA	22
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA GLOBAL	23
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	24
DISPONIBILIDAD Y ACCESO A BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES	25
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES	26
PARTE 2	28
¿QUÉ PASÓ ENTRE EL AÑO 2015 Y LA ACTUALIDAD (2023)?	28
RETOS Y CAMINOS HACIA LA INCLUSIÓN Y LA CALIDAD	28
De transiciones político institucionales y pandemias	28
Las estrategias de planificación	29
COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA EN PRIMARIA Y SECUNDARIA	30
ACCESO Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA	32
ACCESO Y CALIDAD EN LA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR	33
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES	35
EQUIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA GRUPOS VULNERABLES	36
NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y COMPETENCIAS EN ARITMÉTICA BÁSICA	37
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA GLOBAL	37
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	38
DISPONIBILIDAD Y ACCESO A BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES	39
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL PARA DOCENTES	39
PARTE 3	41

AVANCES, OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS	41
¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS EN 2015 Y SI SE HAN RESUELTO O SE HAN REPORTADO AVANCES AL 2023?	41
LA RATIFICACIÓN DEL ESTADO A LA AGENDA 2030 Y, ESPECÍFICAMENTE, AL ODS 4: ¿IMPLICA UNA TRANSFORMACIÓN O EL INICIO DE UN CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN HONDURAS?	42
¿LA AGENDA 2030 Y LA INCORPORACIÓN DEL ODS4 REPRESENTÓ TAMBIÉN UNA INCLUSIÓN MÁS AMPLIA E IGUALITARIA DE LOS GRUPOS MARGINADOS HISTÓRICAMENTE EN EL PAÍS?	43
AVANCES QUE SE HAN VISTO EN EL PAÍS EN LOS AÑOS 2016, 2018, 2020, 2022 Y 2023 EN CUANTO AL ODS4	44
DESAFÍOS ACTUALES PARA EL ALCANCE DEL ODS4	45
Mejoras en acceso, calidad, gratuidad e igualdad en los últimos 5 años	45
¿Es el financiamiento un factor que impide el avance del ODS4 en el país en sus diferentes modalidades y niveles?	47
CONCLUSIONES	49
RECOMENDACIONES	50
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA	53

Resumen Ejecutivo

Desde 2015, el sistema educativo de Honduras ha visto ciertos progresos, aunque aún tiene que superar significativos desafíos en términos de equidad, calidad y sostenibilidad del acceso a la educación. A pesar de las políticas diseñadas para aumentar la cobertura educativa, especialmente en la educación primaria, las desigualdades estructurales y la escasa inversión siguen impactando negativamente a las comunidades más vulnerables, como las rurales, indígenas y aquellas en situación de pobreza. La carencia de infraestructura adecuada y los problemas relacionados con la calidad de la enseñanza resaltan la necesidad urgente de un enfoque más integral y estratégico.

Desigualdades en la cobertura y calidad educativa

En 2015, las políticas orientadas a garantizar el acceso universal lograron que la tasa de matrícula en educación primaria alcanzara un 93%. No obstante, en el nivel secundario, la situación era diferente: la tasa de inscripción disminuía significativamente al 55%, particularmente en zonas rurales. En estas áreas, factores como la distancia a las escuelas y la necesidad de que los niños trabajen para apoyar la economía familiar complican el panorama. Esta desigualdad se manifiesta en una brecha persistente entre regiones urbanas y rurales, perpetuando un ciclo de exclusión social que restringe el desarrollo económico y social del país.

La pandemia de COVID-19 agravó estos desafíos, poniendo en evidencia la falta de preparación del sistema educativo para un entorno de aprendizaje remoto. La respuesta gubernamental, que incluyó iniciativas como “Te Queremos Estudiando desde Casa”, no logró reducir eficazmente el impacto negativo. La desigualdad en la conectividad y la escasez de dispositivos electrónicos en hogares de bajos ingresos aumentaron la brecha educativa, perjudicando en mayor medida a los estudiantes más vulnerables. Esto subrayó la necesidad de invertir en infraestructura tecnológica y desarrollar nuevas estrategias pedagógicas que puedan sostener un sistema híbrido capaz de enfrentar futuras crisis.

Desafíos en infraestructura y formación docente

La infraestructura educativa en Honduras sigue siendo un reto considerable. Aunque se han realizado algunas inversiones recientes en la construcción y reparación de escuelas, estos esfuerzos no han logrado satisfacer las necesidades reales del sistema. Numerosas instituciones, particularmente en zonas rurales, carecen de condiciones básicas de seguridad y funcionalidad, como acceso a agua potable, electricidad y espacios apropiados para el aprendizaje. Estas carencias afectan directamente la calidad educativa y limitan la capacidad de las escuelas para ofrecer un entorno seguro y enriquecedor. Los programas de infraestructura han sido desiguales, y la falta de un plan de mantenimiento estructurado ha dejado muchas escuelas en estado precario.

La formación docente sigue siendo un aspecto crucial. A pesar de los esfuerzos para profesionalizar y capacitar a los educadores, el avance ha sido limitado. Solo el 20% de los maestros en educación preescolar posee un título superior, subrayando la necesidad de mejorar tanto la calidad como la actualización de los programas formativos. Las metodologías pedagógicas aún están arraigadas en prácticas tradicionales, las cuales no satisfacen las demandas del sistema educativo moderno. La formación continua también resulta insuficiente, particularmente en áreas rurales

donde los docentes tienen menos acceso a oportunidades de desarrollo profesional. La pandemia no hizo más que agudizar estas deficiencias, poniendo en evidencia la brecha tecnológica y la falta de preparación para utilizar herramientas digitales en la enseñanza.

Inclusión y grupos vulnerables

Los expertos han destacado que, a pesar del incremento en la matrícula de estudiantes con necesidades especiales, aún persisten barreras para una educación inclusiva auténtica. Las escuelas frecuentemente carecen de infraestructura accesible y de recursos pedagógicos especializados, lo que limita la correcta integración de estos estudiantes. Los programas de educación bilingüe dirigidos a comunidades indígenas y afrodescendientes no siempre se ejecutan eficazmente, generando una educación desigual y segmentada. Las niñas en zonas rurales enfrentan desafíos adicionales, como el matrimonio infantil y la violencia de género, que contribuyen a las elevadas tasas de deserción escolar.

El acceso a la educación superior continúa siendo restringido. A pesar del incremento en becas y programas de apoyo financiero, estos no bastan para satisfacer la demanda. Las universidades públicas se ven afectadas por problemas presupuestarios y luchan por proporcionar una educación de calidad, mientras que los programas de formación técnica y profesional no logran adaptarse de manera efectiva a las exigencias del mercado laboral. Esta situación deja a muchos jóvenes sin los recursos necesarios para tener éxito en un entorno económico cada vez más competitivo.

Conclusión

En definitiva, Honduras ha hecho progresos en cuanto a la cobertura educativa, pero persisten desafíos importantes en términos de calidad e inclusión que exigen una atención inmediata. Las inversiones continúan enfocándose principalmente en gastos operativos, dejando de lado mejoras estructurales esenciales, y es crucial transformar la formación docente para adaptarla a las exigencias del siglo XXI. Además, existen notables desigualdades entre las áreas urbanas y rurales, colocando a los estudiantes más vulnerables en situaciones de desventaja que restringen sus oportunidades.

Es crucial que las políticas educativas se enfoquen en reducir estas desigualdades a través de una inversión estratégica y una gestión eficiente de los recursos. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado será esencial para asegurar un sistema educativo inclusivo y sostenible, capaz de equipar a las futuras generaciones para un mundo en constante transformación. El compromiso debe ser total, abordando no solo la cobertura, sino también la calidad, la infraestructura y la equidad en todos los niveles educativos.

Antecedentes del Estudio

Educación en Voz Alta (EVA)

Educación en Voz Alta (EVA) ha sido creado por la Alianza Mundial por la Educación (AME) para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos por defender la mejora de los sistemas nacionales de educación pública en los países de ingreso bajo y medio-bajo, con el objetivo de garantizar que los sistemas nacionales de educación pública se fortalezcan para producir igualdad y una educación de calidad transformadora del género para todas y todos, incluidos los grupos marginados. Oxfam IBIS es el agente de financiamiento de EVA. Como parte de su Componente Operativo 1, desde donde se apoya a más de 50 Coaliciones Nacionales de Educación (CNE) que reúnen las voces de las organizaciones de aquellos grupos marginados que tienden a ser discriminados en los sistemas educativos nacionales, como las niñas y las mujeres, las personas que viven con discapacidades y las personas en situación de pobreza.

El CO1 de EVA ofrece apoyo a las Coaliciones Nacionales de Educación para que puedan participar con una voz coordinada en los debates sobre política educativa para defender el derecho a la educación para todas y todos y, en particular, para los grupos marginados. Los financiamientos del CO1 también apoyan el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las coaliciones nacionales de educación para participar de manera efectiva y significativa en los debates basados en la evidencia y relevantes para la política.

En ese sentido el Foro Dakar Honduras desarrolla actualmente su proyecto “Alzando la Voz de la Sociedad Civil por una educación pública gratuita en Honduras periodo 2024-2026” el cual contempla 3 objetivos específicos, siendo este proceso una acción que responde al número 2: **“Generar conocimiento, datos, información sobre aumento de inversión pública, ejecución del gasto, asignación presupuestaria, transparencia, presupuestos sensibles a género y justicia tributaria para fortalecer posicionamientos, acciones de monitoreo y veeduría, del sector educación pública2.**

Desde el año 2018 el Foro Dakar Honduras ha llevado a cabo una serie de informes sombra en seguimiento a los avances o retrasos en el cumplimiento del ODS4 en Honduras y sus metas. Estos informes representan una herramienta de incidencia en la política pública educativa, el cual es uno de los propósitos del espacio del Foro Dakar Honduras. Contar con información verídica nos permite lograr proponer y dialogar con los tomadores de decisión del sector educación del país, en miras de aportar a lograr contar con una educación pública gratuita y de calidad en Honduras.

EVA y el Foro Dakar Honduras incorporan el enfoque basado en derechos humanos y se alinea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 4 sobre educación de calidad. La promoción de la igualdad de género y la inclusión de los grupos marginados, como las personas con discapacidad, es una preocupación transversal de EVA y el Foro.

Contexto general

Honduras, con una población estimada de 10,593,798 personas en 2023, experimenta un crecimiento poblacional anual del 1.54%, una tasa relativamente alta en la región^{1,2}. Este crecimiento se ve reflejado tanto en áreas urbanas como rurales, con una proporción significativa de la población viviendo en áreas urbanas, representando el 55% del total. La esperanza de vida al nacer es de 77.1 años, mientras que la tasa global de fecundidad se sitúa en 2.4 hijos por mujer³. Este panorama demográfico muestra un envejecimiento gradual de la población, lo que traerá consigo desafíos relacionados con la protección social y el sistema de salud en el futuro⁴.

En cuanto a la distribución por género, el 33.8% de los hogares hondureños están encabezados por mujeres, destacando una creciente responsabilidad de las mujeres en el sostenimiento de los hogares. Sin embargo, persisten desigualdades significativas en términos de participación económica, con una tasa de participación laboral femenina baja, en torno al 8.7%, y una brecha de género persistente en el acceso a empleos formales y bien remunerados⁵. Además, la tasa de desempleo femenino sigue siendo más alta en comparación con los hombres⁶.

Honduras enfrenta una alta desigualdad social, reflejada en su coeficiente de Gini y las tasas de pobreza. En 2022, el 48% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 25.2% se encontraba en pobreza extrema^{7,8}. Las disparidades son aún más marcadas en áreas rurales, donde la pobreza extrema es más prevalente, particularmente en el Corredor Seco y entre las comunidades indígenas y afrodescendientes⁹. A nivel nacional, el índice de desarrollo humano (IDH) clasifica a Honduras entre los países de desarrollo humano medio¹⁰.

El *Atlas de Desarrollo Humano* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo resalta que la pobreza multidimensional es más severa en los departamentos del occidente y sur del país, exacerbando las desigualdades estructurales que afectan a las zonas rurales y a las poblaciones históricamente marginadas. Además, señala que estas desigualdades están relacionadas con la falta de acceso a servicios básicos, educación y oportunidades económicas, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y limita el potencial de desarrollo en regiones fuera de los principales centros urbanos¹¹.

¹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023.

² Instituto Nacional de Estadísticas, 2022

³ Ídem.

⁴ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023.

⁵ Banco Mundial, 2022.

⁶ Instituto Nacional de Estadísticas, 2022

⁷ Ídem.

⁸ Banco Mundial, 2022.

⁹ Ídem.

¹⁰ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023.

¹¹ Ídem.

El sistema educativo en Honduras enfrenta grandes desafíos en términos de cobertura y calidad. En 2023, la matrícula en pre-básica mostró una fuerte presencia: 18,499 estudiantes en primer grado, 59,587 en segundo y 130,192 en tercer grado¹². Sin embargo, la cobertura disminuye notablemente en educación secundaria y superior, especialmente en zonas rurales y entre las poblaciones vulnerables, lo que amplía las brechas educativas^{13, 14}.

La pandemia de COVID-19 agravó estos problemas, afectando la asistencia y reduciendo los años de escolarización efectivos, sobre todo en áreas con recursos limitados, donde la adaptación al aprendizaje a distancia fue difícil¹⁵. El 29.6% de los jóvenes entre 12 y 30 años no estudia ni trabaja¹⁶. Esta exclusión refleja barreras económicas y sociales que obstaculizan el acceso a la educación y al mercado laboral formal, situación que se agravó con la pandemia¹⁷.

En lo económico, Honduras depende fuertemente de las remesas, que representaron el 26.7% del PIB en 2022¹⁸. Aunque estas han mejorado los ingresos de muchos hogares, no han logrado reducir la pobreza ni la desigualdad. El empleo informal domina el mercado laboral, con el 96% de la población pobre en trabajos no regulados, una tasa de subempleo por ingresos del 36.7%, y un 20.9% subempleado por insuficiencia de horas^{19, 20}.

El acceso a servicios básicos sigue siendo desigual. Mientras en áreas urbanas ha mejorado el acceso a agua potable y saneamiento, las zonas rurales enfrentan grandes dificultades, con solo el 13.7% de las conexiones de alcantarillado tratadas adecuadamente, lo que perpetúa la pobreza y afecta la salud pública²¹.

Finalmente, en lo relacionado a las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras adicionales en acceso a servicios, educación y empleo. La Política Nacional contra el Racismo, adoptada en 2016, aún no ha logrado cambios efectivos que garanticen su inclusión, perpetuando la pobreza y desigualdad en estas minorías²².

Honduras y los ODS

Desde el año 2015, Honduras inició un proceso para identificar y concretar las acciones necesarias para cumplir con el compromiso asumido en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptando como propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El país presentó su primer Informe Nacional Voluntario (INV) en julio de 2017, con el apoyo de la

¹² Secretaría de Educación, 2024.

¹³ Instituto Nacional de Estadísticas, 2022.

¹⁴ Banco Mundial, 2022.

¹⁵ Ídem.

¹⁶ Instituto Nacional de Estadísticas, 2022.

¹⁷ Banco Mundial, 2022.

¹⁸ Instituto Nacional de Estadísticas, 2022.

¹⁹ Antes llamada Tasa de Subempleo Visible.

²⁰ Instituto Nacional de Estadísticas, 2022.

²¹ Banco Mundial, 2022.

²² Ídem.

cooperación internacional y de agencias y dependencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU), como el Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés), así como con la participación de diversos sectores de la sociedad. Este primer informe, titulado "Sentando las Bases para Implementar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", identificó cinco grandes desafíos para el mediano plazo, vinculados a la gobernanza, el monitoreo y la evaluación de la Agenda 2030, y conceptos clave como la participación y la territorialización.

El segundo Informe Nacional Voluntario (II-INV) se presentó en julio de 2020, y su preparación comenzó en 2018 bajo el liderazgo de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG). Este proceso participativo involucró tanto a instituciones gubernamentales como a la sociedad civil, aunque se vio afectado por la pandemia de COVID-19. En este informe se incluyó información y análisis sobre los avances en los indicadores de la Agenda Nacional de los ODS (AN-ODS) para el periodo 2015-2019 (y en algunos casos hasta 2018). El documento destacó los progresos más significativos alcanzados entre 2015 y 2019. En relación con el ODS 4, se subrayó el aumento considerable en las tasas de cobertura en la educación prebásica y los primeros dos niveles de la educación básica (primaria), junto con una ligera mejora en la tasa de alfabetización. Además, se destacó que las diferencias urbano-rurales en los indicadores educativos eran mínimas, con una brecha de apenas 1.5 puntos porcentuales (pp), lo que fue presentado como un logro importante. El informe también mencionó la Ley Fundamental de Educación y el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, de los cuales se derivaron modalidades alternativas para el acceso al tercer ciclo educativo de la población en condiciones de pobreza, así como estrategias de formación inicial de docentes y programas como el Programa Presidencial Becas HONDURAS 20/20, entre otros²³.

El tercer Informe Nacional Voluntario (III-INV), presentado en julio de 2024, tuvo como propósito mostrar las iniciativas, programas, proyectos y desafíos relacionados con la implementación de la Agenda 2030 en Honduras. Este informe se elaboró con los aportes de diversos actores que contribuyen al cumplimiento de los ODS, en un contexto de transición política, social y económica, marcado por la intención de superar prácticas que profundizaron la desigualdad y la pobreza. A ello se sumaron los efectos de choques severos como la pandemia de COVID-19 en 2020, los huracanes Eta e Iota, y tensiones geopolíticas internacionales. El proceso de elaboración del informe se llevó a cabo en tres fases: primero, el alineamiento de la Agenda 2030 y los ODS con el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo de Honduras; segundo, la recolección de información cuantitativa por parte de distintas entidades del sector público; y tercero, el aporte del Sistema de Naciones Unidas (SNU), con la participación de sus diversas agencias, fondos y programas. También se integraron las principales iniciativas del sector privado, lideradas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) como punto focal, y se realizaron consultas a través del Foro Multiactor, en el que participaron sociedad civil y academia. En este contexto, el Foro DAKAR también jugó un papel fundamental al participar en las mesas nacionales y contribuir a la construcción del posicionamiento conjunto del Informe Nacional Voluntario tanto en 2020 como en 2024.

²³ Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los ODS. II Informe nacional voluntario de la agenda 2030: de la recuperación al desarrollo sostenible, julio 2020.

Ilustración 1: Compromisos del Estado de Honduras para el cumplimiento de los ODS



Fuente: Informe Nacional Voluntario, 2024

En cuanto al ODS 4, el gobierno de Honduras se compromete a enfrentar con urgencia la crisis educativa mediante la implementación del Plan de Refundación de la Educación, cuyo objetivo es ampliar el acceso, especialmente en los niveles primario y secundario a nivel nacional, y erradicar el analfabetismo para 2025. Se han asignado 2,000 millones de lempiras para la rehabilitación de la infraestructura educativa, además de impulsar programas con enfoque social como el Programa de Acción Solidaria y el Programa de Merienda Escolar.

Sobre este estudio

Objetivos

El propósito de este estudio es analizar los avances que ha habido en Honduras en cuanto al ODS4 y sus metas desde el año de su ratificación, 2015, hasta el año 2023, tomando en cuenta los resultados que se hubiesen presentado en las dos revisiones nacionales voluntarias en años anteriores en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.

Los objetivos específicos son:

1. Recopilar información para evidenciar y/o confirmar en qué medida se logran las metas y el mismo ODS4 de la Agenda 2030 en Honduras, con el fin de utilizar los datos para los posicionamientos, acciones de incidencia y defensa del derecho humano a la educación (específicamente para incidir en la accesibilidad y calidad de la educación para todos y

- todas, precisamente de grupos históricamente marginados como población con discapacidad, pueblos originarios, mujeres y niñas, entre otros)
2. Hacer un análisis comparativo de la situación previa a la ratificación del Estado a la Agenda 2030 en el país (enfocado en el ODS4) y la situación de avances del mismo en los años 2016, 2018, 2020 y la situación última al año 2023 para de esta manera identificar los avances graduales, los retos y cuellos de botella que existen aún para alcanzar las metas que se han dejado atrás.
 3. Brindar recomendaciones sobre cómo mejorar las acciones estratégicas para alcanzar cada una de ellas al año 2030 y como el rol de la sociedad civil puede ser más efectivo para apoyar al Estado en el alcance de las mismas.

Alcance, metodología y limitaciones del Estudio

El estudio hace uso de información de las fuentes de estadísticas oficiales del Estado, información de otras instancias nacionales como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, FOSDEH, Foro DAKAR Honduras, UPNFM, CONADEH, entre otros como también organismos internacionales con credibilidad (UNESCO, UNICEF, OCDE, Banco Mundial, etc.)

El mismo puede abarcar de igual forma entrevistas y grupos focales con actores claves del sector a nivel central y descentralizado

El estudio integrará el enfoque de los derechos humanos, la perspectiva de la igualdad de género, la inclusión de la discapacidad y otros aspectos relevantes de no discriminación como una preocupación transversal en toda su metodología y en todos los resultados, incluido el informe final.

El estudio deberá prestar especial atención a la pertinencia y al logro del ODS4 y sus metas establecidas en los diferentes niveles de educación del país.

Se debe llevar a cabo desde una mirada de la sociedad civil con un enfoque de incidencia asertiva y no confrontativa, dando énfasis en el rol que el Estado debe asumir para alcanzar el ODS4 y sus metas.

Para el diseño de la metodología, se recomienda utilizar una combinación de métodos de evaluación cualitativos y en la medida de lo posible cuantitativos, y que incluya varios métodos de análisis; llevar a cabo la triangulación de datos, utilizando diferentes métodos de recopilación de datos, tipos de datos y perspectivas de las partes interesadas; utilizar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en el análisis, así como la visión de la equidad en el análisis; garantizar que haya un claro vínculo lógico entre los datos recopilados y analizados y la conclusión y las recomendaciones presentadas; el análisis y la interpretación de los datos bien comunicados a través de un lenguaje accesible y visuales útiles (diagramas, gráficos, tablas, según sea necesario).

La metodología podría incluir las siguientes actividades:

- Leer los documentos pertinentes de EVA y la CNE, como los proyectos e informes narrativos; los informes de avance técnico de EVA y otros documentos.

- Elaborar guías de entrevistas semiestructuradas para entrevistas separadas o discusiones de grupos focales con representantes de la SE, miembros de la CNE y autoridades nacionales y otras partes interesadas;
 - Recopilar información mediante la metodología establecida (entrevistas, grupos de discusión, encuestas); analizar y redactar un informe preliminar.
 - Presentar los resultados preliminares a la CNE con el fin de recibir comentarios.
 - Incorporar las correcciones de los hechos y la información pertinente.
 - Elaborar el informe final, incluyendo el resumen ejecutivo y los anexos.
-
- Presentar las conclusiones y recomendaciones a la CNE
 - La metodología deberá tener en cuenta los protocolos de ética y confidencialidad y adaptarse en caso de que haya cambios durante la recopilación de información.

El proceso de estudio será de forma virtual (solo presencial en los casos que el consultor encuentre pertinentes o para cualquier entrevista con algún actor clave)

Testimonios o resultados de entrevistas con actores claves del sector

En un análisis de la situación educativa en Honduras desde 2015 hasta el presente, los dos especialistas consultados destacaron tanto avances como retos persistentes que impactan la equidad y calidad del acceso a la educación. Según uno de ellos, aunque la educación primaria ha logrado mantener una alta tasa de matrícula debido a políticas enfocadas en ampliar la cobertura, las dificultades se acentúan en la educación secundaria, especialmente en las zonas rurales. Aquí, las tasas de deserción continúan siendo preocupantes, con barreras como la lejanía de las escuelas, la pobreza, y la inseguridad que afectan significativamente a las comunidades más vulnerables.

La infraestructura educativa fue uno de los puntos críticos mencionados por ambos expertos. A pesar de que en los últimos años se han realizado inversiones para mejorar y construir nuevos centros escolares, estas acciones no han sido suficientes para satisfacer las necesidades reales del sistema. Uno de los especialistas enfatizó que las escuelas rurales siguen enfrentando condiciones severas, como la falta de acceso a servicios básicos y aulas sobrepobladas, lo que dificulta un ambiente de aprendizaje adecuado. Incluso en áreas urbanas, el aumento de la matrícula no ha sido acompañado por una expansión proporcional de la infraestructura, lo que genera problemas como el deterioro de edificios y riesgos para la seguridad de los estudiantes.

En términos de inclusión, las opiniones se centraron en los avances y las brechas que aún existen. Uno de los especialistas señaló que, si bien ha habido un incremento en la matrícula de estudiantes con necesidades especiales, los recursos siguen siendo inadecuados. La infraestructura accesible y las herramientas pedagógicas especializadas son limitadas, lo que impide una inclusión real y efectiva. Además, ambos coincidieron en que la formación de los docentes no está preparada para atender de manera adecuada a una población estudiantil diversa, afectando la calidad de la enseñanza.

La calidad de la formación docente surgió como un tema clave en ambas entrevistas. Los especialistas discutieron que, a pesar de la transición hacia la formación universitaria para maestros, los currículos siguen sin actualizarse, y las técnicas pedagógicas permanecen ancladas en métodos

tradicionales. Se destacó que la formación continua es desigual, con los maestros en zonas rurales siendo los más perjudicados, ya que enfrentan barreras de acceso a oportunidades de capacitación. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas dificultades, evidenciando la brecha digital y la falta de preparación de los educadores para manejar el aprendizaje remoto.

El acceso a la educación superior también fue un punto de análisis importante. Los expertos indicaron que, aunque ha habido un ligero incremento en la oferta educativa y la matrícula, las dificultades presupuestarias y la alta demanda limitan la capacidad de las universidades para ofrecer una educación de calidad. Las desigualdades socioeconómicas siguen siendo un obstáculo significativo, y los jóvenes de familias de bajos ingresos, especialmente en áreas rurales, enfrentan enormes barreras para acceder a la educación superior y mantenerse en ella. Además, la desconexión entre las universidades y el sector empresarial contribuye a la falta de preparación de los graduados para el mercado laboral, dejando a muchos jóvenes sin las herramientas necesarias para enfrentar las demandas económicas.

En resumen, los dos especialistas coincidieron en que, a pesar de los logros en la ampliación de la cobertura educativa, la calidad y la inclusión siguen siendo grandes desafíos. Las políticas públicas han buscado mitigar algunas desigualdades mediante programas de becas y alimentación escolar, pero estos esfuerzos aún no llegan con la fuerza necesaria a las poblaciones más desfavorecidas. Ambos subrayaron la necesidad de una inversión estratégica y una mejor gestión de los recursos, así como programas de formación docente más actualizados y efectivos. La conclusión de ambos fue clara: Honduras necesita un compromiso más fuerte y un enfoque integral para superar las brechas históricas y garantizar un sistema educativo que prepare a las futuras generaciones para enfrentar un mundo cambiante.

literatura estadísticas, informes, entre otros documentos oficiales utilizados

Parte 1

¿Cual era la situación de la educación pública en Honduras en el año 2015?

La situación educativa en Honduras durante el año 2015 puede considerarse un período de transición y significativos desafíos para el país, caracterizado por esfuerzos renovados para mejorar tanto la calidad como el acceso a la educación en todos los niveles. Este análisis tiene como objetivo proporcionar una visión integral del estado educativo de ese año, basándose en datos obtenidos de diversos documentos y estudios realizados en el contexto hondureño. Se examinarán temas clave como la cobertura educativa, la calidad de la enseñanza, las reformas implementadas, los desafíos persistentes y las políticas públicas adoptadas durante ese período.

Cobertura y calidad educativa en primaria y secundaria.

En 2015, Honduras enfrentaba desafíos importantes en cuanto a la cobertura, gratuidad, equidad, calidad educativa y resultados en los niveles de primaria y secundaria. Estos factores resultan esenciales para el desarrollo social y económico del país, y un análisis detallado de estas áreas revela tanto los avances como las limitaciones del sistema educativo hondureño.

Honduras logró avances significativos en la cobertura educativa, especialmente en el nivel primario. La tasa neta de matrícula alcanzó el 93%, lo que refleja que la mayoría de los niños y niñas en edad escolar estaban inscritos. Sin embargo, en la educación secundaria, la tasa neta de matrícula fue solo del 55%, lo que evidencia el problema del abandono escolar entre adolescentes, particularmente en zonas rurales. Esto perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión social, afectando gravemente las oportunidades futuras de los jóvenes (Espino, 2015, p. 23). Las áreas rurales enfrentaban desafíos adicionales debido a la falta de infraestructura, las largas distancias para llegar a las escuelas y las obligaciones laborales de muchos niños para ayudar a sus familias (Secretaría de Educación de Honduras, 2015).

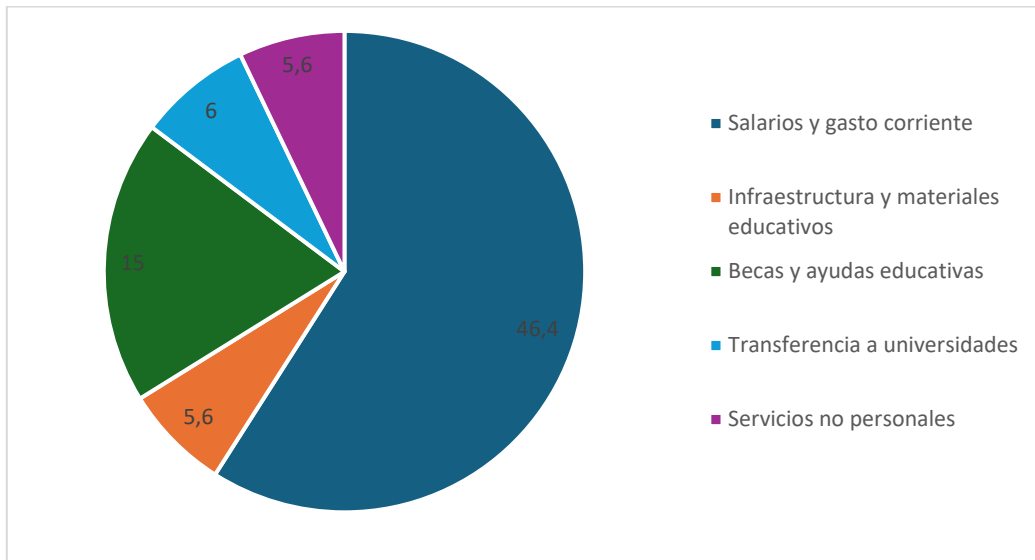
Aunque la educación es oficialmente gratuita, las barreras económicas indirectas seguían siendo un obstáculo para muchas familias, especialmente en zonas rurales. Los costos asociados con el transporte, uniformes y materiales escolares, aunque no son exigidos por el Estado, limitaban la asistencia regular a la escuela. Si bien existían programas como la "Merienda Escolar", su alcance no era suficiente para mitigar estas barreras (Espino, 2015, p. 35).

En términos de equidad, persistían desigualdades significativas tanto por razones de género como por ubicación geográfica. Las zonas rurales mostraban menores tasas de inscripción y finalización escolar en comparación con las áreas urbanas. Esta brecha se debía en gran medida a la falta de infraestructura adecuada y a la necesidad de muchos niños de trabajar desde temprana edad para apoyar a sus familias (Espino, 2015, p. 19).

La calidad de la educación también representaba un desafío en 2015. Los resultados de las evaluaciones nacionales reflejaban un bajo rendimiento en áreas fundamentales como matemáticas y lenguaje. Menos del 40% de los estudiantes alcanzaron un nivel satisfactorio en matemáticas, mientras que en lenguaje, el porcentaje no superaba el 50% (Espino, 2015, p. 26). Estos resultados revelan deficiencias en la formación docente, la falta de recursos didácticos y un currículo que no respondía adecuadamente a las necesidades de los estudiantes. A esto se sumaba la sobrecarga de maestros, muchos de los cuales trabajaban en condiciones adversas, particularmente en zonas rurales (Banco Mundial, 2015, p. 54).

A pesar de que el presupuesto asignado a la educación ascendió a 27,811.2 millones de lempiras en 2015, representando el 15% del presupuesto nacional, gran parte de estos recursos se destinaban a salarios y gastos corrientes, dejando una proporción limitada para inversiones en infraestructura y la mejora de materiales educativos. Esta distribución desigual de los recursos impactaba especialmente en las escuelas rurales, que sufrían de una grave escasez de maestros capacitados y de recursos esenciales (Espino, 2015, p. 40). Morales (2024) destaca que este enfoque en gastos recurrentes, en lugar de inversión estructural, perpetuaba las limitaciones del sistema educativo y contribuía a mantener la desigualdad. Además, subraya que la reducción en el gasto público a partir de 2015 fue un factor clave que exacerbó estas deficiencias, afectando directamente la calidad y equidad educativa en todo el país (Morales, 2024).

Ilustración 2: Distribución porcentual del presupuesto educativo 2015



Fuente: Elaboración propia a partir del Presupuesto ciudadano 2015

Otro aspecto crucial era la falta de un sistema robusto de seguimiento y evaluación que permitiera identificar de manera efectiva las áreas que requerían intervención inmediata. Aunque se realizaron algunos esfuerzos en esta dirección, como la implementación de pruebas nacionales de rendimiento, los resultados no siempre se utilizaban para orientar políticas públicas que mejoraran la calidad educativa de manera integral.

Acceso y calidad en la atención y educación en la primera infancia

En 2015, la educación prebásica y la atención a la primera infancia en Honduras presentaron importantes desafíos en términos de acceso y calidad. La cobertura educativa neta para el nivel de educación prebásica mejoró de un 35.9% en 2015 a un 38.3% en 2017, lo cual representa un avance modesto, pero insuficiente para atender las necesidades de la población infantil. Muchos niños no ingresaban a la edad normativa de 3 a 5 años, lo que afectaba negativamente su rendimiento y aumentaba el riesgo de sobreedad, especialmente en las zonas rurales (Secretaría de Educación, 2018, p. 57). A pesar de los avances en algunos departamentos como Ocotepeque y Gracias a Dios, otros como Yoro y Cortés mostraban una cobertura baja, evidenciando una disparidad en el acceso según la región (Secretaría de Educación, 2018, p. 57).

La participación en la educación prebásica entre grupos étnicos también reflejaba desigualdades. Comunidades como los Misquitos y Garífunas mostraban mayores tasas de matrícula en comparación con los Lencas, cuya participación disminuyó en los últimos años (Secretaría de Educación, 2018, p. 20). Estas diferencias, junto con la pobreza que limitaba el acceso de muchas familias a los servicios educativos, afectaban de manera significativa el panorama educativo del país. Solo 4 de cada 10 niños en edad de asistir estaban matriculados, lo que indica que gran parte de la niñez quedaba excluida del sistema formal de educación (Rojas, 2020, p. 16).

Uno de los factores que más afectaba la calidad educativa en el nivel preescolar era la **infraestructura**. Muchas escuelas carecían de instalaciones y materiales didácticos adecuados, lo que impactaba negativamente en el aprendizaje infantil (Rojas, 2020, p. 22). Asimismo, la **formación docente** no estaba alineada con las necesidades del nivel prebásico, ya que los maestros no contaban con la capacitación adecuada para atender a niños en esta etapa crítica de desarrollo, lo cual generaba una brecha en la calidad de la enseñanza (Rojas, 2020, p. 25).

En cuanto a la **atención a la primera infancia**, el acceso a servicios de salud y nutrición era limitado, especialmente en áreas remotas. Las políticas públicas, aunque reconocían la importancia de estos servicios, no lograban cubrir de manera equitativa a toda la población. Esto se debía, en parte, a la insuficiencia de recursos financieros y la falta de infraestructura adecuada para brindar una atención integral a los niños menores de 5 años (UNICEF, 2015, p. 13). A pesar de los esfuerzos del gobierno hondureño, la inversión pública en 2015 seguía siendo insuficiente para garantizar un acceso equitativo a la educación y los servicios esenciales en las zonas más vulnerables (UNICEF, 2015, p. 24).

En términos de política pública, si bien se reconocía la importancia de la primera infancia en los documentos estratégicos nacionales, la implementación de políticas efectivas seguía siendo un desafío. La falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de un sistema robusto de monitoreo y evaluación limitaban la efectividad de las intervenciones. Las políticas destinadas a la primera infancia a menudo no llegaban a las comunidades más necesitadas, y las brechas en la cobertura y la calidad continuaban siendo significativas.

Tabla 1. Distribución del gasto social en Honduras en 2015

Categoría del gasto	Monto (en millones de Lempiras)
Servicios de salud	16,313.9
Educación	27,811.2
Protección social	25,241.0
Vivienda y servicios comunitarios	1,624.3
Protección del medio ambiente	1,028.2

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir del Presupuesto ciudadano 2015

Acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior

En 2015, Honduras enfrentaba barreras significativas para el acceso a la educación técnica, profesional y universitaria, lo que limitaba el desarrollo personal y profesional de muchos hondureños. Estas barreras estaban profundamente relacionadas con factores socioeconómicos y de género, afectando particularmente a los estudiantes de bajos ingresos y a las mujeres. Aunque la educación superior es clave para mejorar la competitividad, la movilidad social y reducir la pobreza, las desigualdades persistentes dificultaban el acceso equitativo a estos niveles educativos.

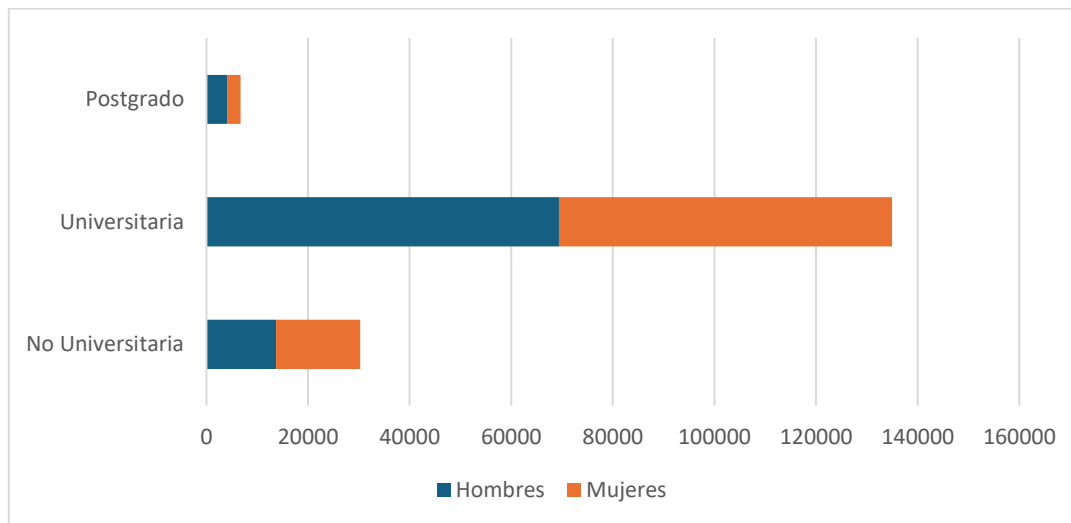
El presupuesto total de egresos de la administración central en 2015 fue de **105,011,369,978 Lempiras** (Secretaría de Finanzas, 2015), de los cuales **17,791,228,341 Lempiras** fueron asignados a la Secretaría de Educación, aproximadamente el **16.9%** del total. Este

presupuesto se destinó a mejorar la cobertura y calidad educativa, pero resultaba insuficiente para abordar las desigualdades estructurales en el acceso a la educación superior, particularmente para mujeres y personas de escasos recursos (Secretaría de Finanzas, 2015).

En cuanto a la educación superior, el presupuesto se distribuyó entre diversas universidades nacionales. Por ejemplo, la **Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)** recibió **23,220,000 Lempiras**, mientras que la **Universidad Nacional de Agricultura (UNA)** recibió **1,862,805 Lempiras** del tesoro nacional, además de **100,000,000 Lempiras** en concepto de crédito externo. Estos fondos se destinaron principalmente a proyectos de infraestructura y programas de inclusión social, como la construcción de edificios y talleres en la UPNFM y la promoción de la producción sustentable en la UNA (Secretaría de Finanzas, 2015). El total del presupuesto asignado a las universidades fue de **125,082,805 Lempiras**, con una parte significativa financiada mediante crédito externo. Esto subraya la dependencia del sistema de educación superior hondureño de financiamiento internacional para realizar mejoras en su infraestructura educativa.

Si bien los proyectos de infraestructura y ampliación de la capacidad educativa eran necesarios, no abordaban plenamente las dificultades de acceso para los estudiantes de bajos ingresos y las mujeres. La falta de financiamiento sostenible y la dependencia de fondos externos planteaban dudas sobre la viabilidad de los programas a largo plazo. Además, aunque se estaban realizando esfuerzos para mejorar la inclusión, los programas sociales no estaban específicamente orientados a apoyar a estos grupos vulnerables, limitando su impacto en la reducción de desigualdades en el acceso a la educación.

Ilustración 3. Población adulta con educación superior en Honduras, 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Informe de educación superior en Iberoamérica, 2016

Estas limitaciones se reflejaban en la matrícula en educación superior que seguía siendo baja en comparación con otros países de la región. En 2015, se estimaba que la cobertura en educación superior rondaba el **15%** de la población entre 18 y 24 años (López y Moncada, 2016, p.

15). El **Plan de Desarrollo Estratégico del Sistema de Educación Superior de Honduras 2014-2023** tenía como objetivo aumentar esta cifra al **30%**, lo que subraya la necesidad urgente de ampliar el acceso a más jóvenes. Sin embargo, la sostenibilidad de estos avances seguía siendo incierta debido a la dependencia de recursos externos para proyectos clave como la infraestructura universitaria.

En cuanto a la distribución por áreas de conocimiento, la matrícula estimada para 2015 alcanzó los **185,876 estudiantes**, con las ciencias sociales, la educación comercial y el derecho como las áreas más populares, acumulando **73,866 estudiantes**, seguidas de educación con **37,475** (López y Moncada, pág. 11). Las áreas más técnicas y científicas continuaban con una representación menor, lo que planteaba un reto para la equidad de género, ya que las mujeres seguían subrepresentadas en campos como las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), áreas que suelen ofrecer mayores oportunidades laborales y mejores salarios (UNAH, 2018, pág. 67).

A nivel de equidad, las disparidades en el acceso a la educación superior eran evidentes. Entre 2010 y 2014, el número de hombres matriculados aumentó un **72.2%**, mientras que la matrícula femenina creció en **27.7%**. Aunque el acceso de mujeres a la educación superior había mejorado, persistían diferencias significativas en los campos de estudio elegidos y en las oportunidades laborales posteriores (López y Moncada, 2016, p. 11). Las mujeres continuaban enfrentando desafíos para acceder a áreas STEM, perpetuando así una brecha en términos de oportunidades económicas y empleo.

Formación y desarrollo de competencias técnicas y profesionales

En el año 2015, Honduras enfrentó desafíos significativos en la formación y desarrollo de habilidades técnicas y profesionales, lo cual restringía la capacidad del país de reforzar su capital humano y mejorar su competitividad globalmente. Uno de los problemas más importantes fue la **desarticulación del sistema de formación profesional**, que impedía la coordinación entre las instituciones educativas. Esta desorganización dificultaba el reconocimiento de los aprendizajes a lo largo de la vida y limitaba la movilidad educativa y laboral de los estudiantes. Además, la falta de una ruta clara para el desarrollo de competencias afectaba la calidad de la formación (Organización de Estados Iberoamericanos, 2018, p. 8).

Otro desafío fue la **falta de relación con las demandas del mercado laboral**. A pesar de los esfuerzos por ofrecer formación técnica, los programas no estaban adecuadamente alineados con las necesidades del mercado. Esto provocó que los egresados tuvieran dificultades para encontrar empleos de calidad, y los sectores económicos continuaban dependiendo de mano de obra poco calificada en áreas como la agricultura, el comercio y la industria manufacturera. La insatisfacción de los empleadores con las competencias adquiridas por los estudiantes subrayaba la urgencia de ajustar la oferta educativa para mejorar la inserción laboral (Organización de Estados Iberoamericanos, 2018, p. 8).

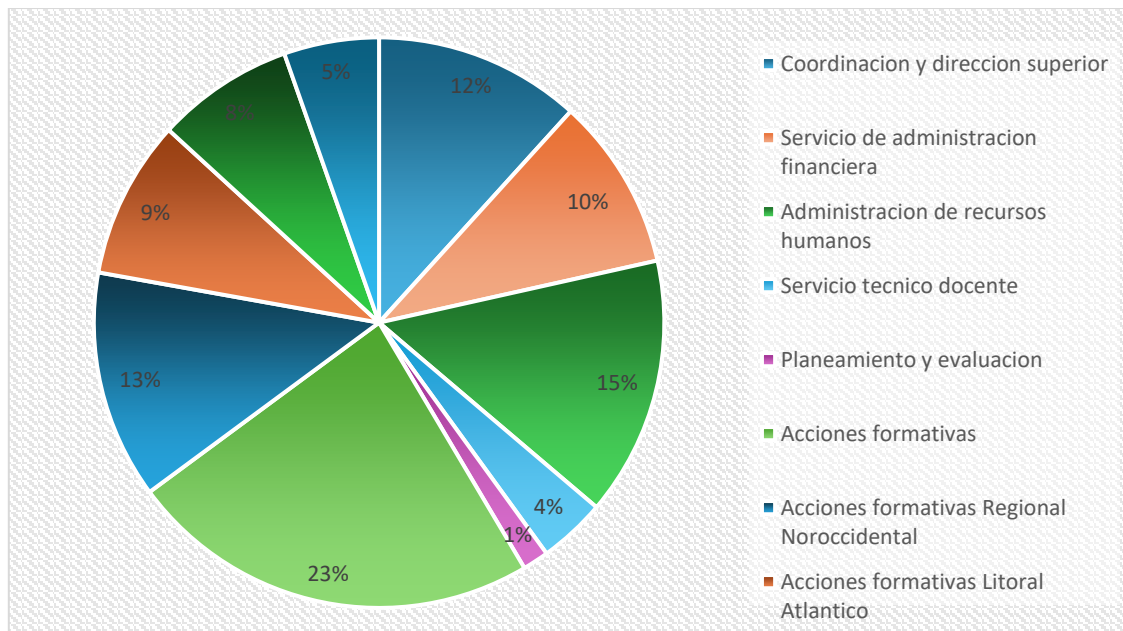
La **cobertura educativa insuficiente** también fue un obstáculo crítico. En 2015, menos del 50% de los jóvenes entre 14 y 19 años tenía acceso a la formación técnica, lo que dejó a más de 800,000 jóvenes fuera del sistema educativo y sin empleo. Esta exclusión no solo afectaba a los jóvenes, sino que también reducía las oportunidades de desarrollo económico del país al limitar la disponibilidad de una fuerza laboral calificada. El **Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)**, que se

encontraba en proceso de desarrollo en 2015, representaba una oportunidad importante para mejorar la calidad y la movilidad educativa. Sin embargo, la falta de implementación completa de este marco limitaba los avances en la certificación y reconocimiento de competencias, lo que a su vez impactaba la calidad de la formación técnica y la capacidad de los estudiantes para acceder a mejores oportunidades laborales (Organización de Estados Iberoamericanos, 2018, p. 9).

El **Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)** jugó un papel clave en la oferta de formación técnica no formal. Entre 2005 y 2015, INFOP matriculó a más de dos millones de estudiantes, con un aumento significativo en el número de cursos y aprobaciones, lo que reflejaba un crecimiento en la demanda de formación técnica. Sin embargo, el desafío seguía siendo alinear esta oferta con empleos de mayor calidad (Organización de Estados Iberoamericanos, 2018, p. 11).

El presupuesto del INFOP para 2015, que ascendía a *783,154,034 lempiras*, fue fundamental para el funcionamiento y sostenibilidad de la institución. Estos recursos se destinaron principalmente a la **coordinación y dirección superior** (*98,740,446 lempiras*), **administración de recursos humanos** (*82,076,421 lempiras*), y **acciones formativas** (*196,283,141 lempiras*), que incluyeron el mantenimiento de infraestructura y la adquisición de equipo (Secretaría de Finanzas, 2015). Este financiamiento fue crucial para apoyar la expansión de los programas de formación técnica, aunque la mejora de la calidad y la pertinencia de los mismos continuaban siendo desafíos importantes para el sistema formativo en Honduras.

Ilustración 4. Distribución presupuestaria del INFOP, 2015.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Finanzas

A pesar de la relevancia de este presupuesto para el INFOP, su impacto dentro del panorama económico nacional era limitado, ya que representaba solo el **0.75% del presupuesto total de Honduras para 2015**, que ascendió a *105,011,369,978 lempiras* (Secretaría de Finanzas, 2015). Esto

reflejaba que, aunque los recursos eran significativos a nivel institucional, el presupuesto del INFOP constituía una pequeña fracción del gasto público general, lo que subrayaba la necesidad de una distribución más efectiva de los fondos y una mayor alineación con las necesidades del mercado laboral para mejorar el impacto del sistema de formación técnica en el desarrollo económico del país.

Equidad en el acceso a la educación y formación para mujeres, niñas y grupos vulnerables

En 2015, Honduras experimentó tanto avances como desafíos en la equidad de acceso a la educación y formación para mujeres, niñas y grupos vulnerables. Las diferencias en el acceso a una educación de calidad eran particularmente notorias entre las comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y aquellas que vivían en situaciones de pobreza extrema. Estas desigualdades se reflejaban tanto en la cobertura educativa como en la calidad de la enseñanza.

El **Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo 2015** destacó que en el mundo, entre 2000 y 2015, la proporción de niñas por cada 100 niños aumentó de 92 a 97 en la enseñanza primaria y de 91 a 97 en la secundaria. A pesar de este progreso, persistían desigualdades de género, especialmente en los países más pobres y con mayores dificultades económicas (UNESCO, 2015, p. 3). En Honduras, estas desigualdades se veían exacerbadas por las condiciones económicas y geográficas, particularmente en áreas rurales, donde muchas niñas enfrentaban barreras estructurales como el matrimonio precoz y la maternidad adolescente. En 2012, a nivel global, una de cada cinco niñas de entre 15 y 19 años estaba casada, lo que afectaba negativamente su acceso y continuidad en la educación (UNESCO, 2015, p. 4). Las adolescentes que se convertían en madres enfrentaban dificultades significativas para continuar sus estudios, a pesar de los esfuerzos legislativos para combatir el matrimonio infantil (UNESCO, 2015, p.26).

La violencia de género en las escuelas también fue un tema crítico, afectando tanto a niñas como a niños, aunque las niñas eran más vulnerables, lo que limitaba su acceso a una educación segura y de calidad. Además, en áreas rurales y comunidades indígenas y afrodescendientes, la violencia y el acoso sexual agravaban aún más la exclusión educativa. Estos factores contribuían a las altas tasas de deserción escolar, particularmente entre las niñas de familias pobres.

La disparidad de género en la tasa de alfabetización en Honduras reflejaba una diferencia en términos de acceso y logros educativos entre hombres y mujeres. Aunque las políticas para mejorar el acceso de las niñas a la educación fueron claves, persistían barreras estructurales, como la falta de recursos y de programas efectivos que abordaran las necesidades específicas de las niñas y mujeres jóvenes en comunidades vulnerables (FOSDEH, 2015, p. 24).

En cuanto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, estos enfrentaron desafíos específicos para acceder a una educación de calidad. A pesar de los esfuerzos por implementar programas de educación intercultural bilingüe, persistían barreras lingüísticas y culturales, exacerbadas por la falta de recursos y la formación insuficiente de los docentes en estas comunidades. El **Plan para los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños (PPIAH)** resaltó que en 2015 la educación para estos grupos fue una prioridad bajo el **Programa Nacional de Educación para los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños (PRONEEAH)**. Un ejemplo fue la **Escuela Alfonzo Lacayo**, que proporcionaba clases en lengua garífuna como parte de un enfoque intercultural bilingüe, con el

objetivo de preservar la cultura y lengua de las comunidades afrodescendientes (SEDESOL, 2018, p. 12).

Tabla 2. Pueblos indígenas en Honduras

Nº	Pueblos	Departamento	Cantidad de familias en las comunidades
1	Miskitu	Gracias a Dios	16,504
2	Tawahka	Gracias a Dios y Olancho	321
3	Negros de habla inglesa	Islas de la Bahía	13,500
4	Garifunas	Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía	14,272
5	Maya Chorti	Copán y Ocotepeque	10,966
6	Lencas	Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán y Valle	160,000
7	Tolupan	Yoro, Francisco Morazán y Olancho	8,057
8	Nahuas	Olancho	2,521
9	Pech	Olancho y Gracias a Dios	1,146
Total			227,287

Fuente: Tomado del Plan para Pueblos Indígenas y Afro-hondureños (PPIAH), 2018.

En términos de financiamiento, en 2015 se asignaron **46,593,971 lempiras** a la **Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe**, lo que permitió la implementación de proyectos educativos con enfoque intercultural. Además, se desarrollaron estrategias diferenciadas para la implementación del **Bono Vida Mejor (BVM)**, beneficiando a **5,127 familias lencas**, **45 familias garifunas** y **128 familias tolupanas**, entre otros (SEDESOL, 2018, p.20; Secretaría de Finanzas, 2015). Estas iniciativas reflejaron un esfuerzo del gobierno por atender las necesidades educativas de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante programas específicos de educación y asistencia social.

Sin embargo, a pesar de estos avances y las asignaciones presupuestarias, persistían desafíos estructurales que limitaban el acceso equitativo a la educación para estos grupos. Las barreras geográficas y económicas, sumadas a la discriminación cultural y de género, continuaban restringiendo el acceso a una educación de calidad para mujeres, niñas, y poblaciones indígenas y afrodescendientes (SEDESOL, 2018. P. 12). Las niñas y mujeres jóvenes en áreas rurales y comunidades indígenas eran particularmente vulnerables a la exclusión educativa. Factores como la pobreza, la violencia de género y las responsabilidades domésticas contribuían a las altas tasas de abandono escolar entre las niñas, especialmente en la educación media (FOSDEH, 2015, p. 14). Además, el acceso a la formación técnica y vocacional también fue limitado para los grupos vulnerables, debido a la insuficiencia de programas en áreas rurales.

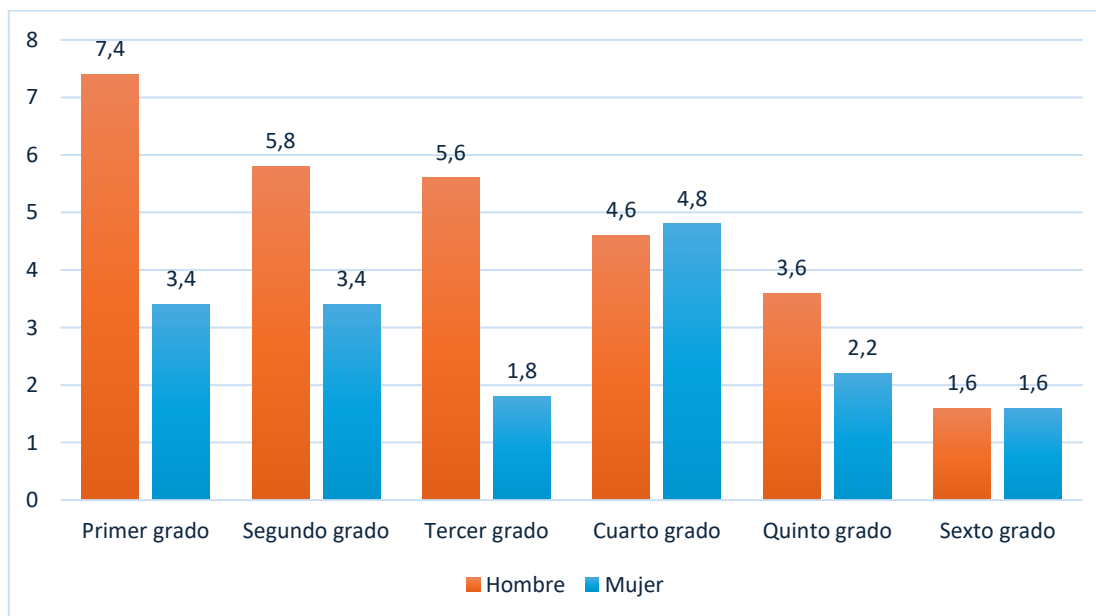
Nivel de alfabetización y competencias en aritmética básica

En el año 2015, Honduras se enfrentaba a diversos desafíos relacionados con los niveles de alfabetización y las competencias en aritmética básica. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, el 23.81% de la población carecía de habilidades de lectura y escritura, lo que denota una alta tasa de analfabetismo que afecta a casi una cuarta parte de sus ciudadanos (EPHPM, INE 2015). Esta situación restringía el acceso igualitario a oportunidades educativas y dificultaba el desarrollo de competencias esenciales, como las habilidades matemáticas básicas.

En cuanto al rendimiento académico, el desempeño en matemáticas y lenguaje en sexto grado era insuficiente. En el año 2000, el rendimiento en matemáticas fue del 39%, y en lenguaje del 46%. Aunque la meta para 2015 era alcanzar un 70% en ambas áreas, el resultado final en matemáticas fue solo del 51%, evidenciando un progreso limitado (Foro DAKAR Honduras, 2018, p. 6). Esta brecha en el rendimiento refleja deficiencias en la calidad educativa y pone de manifiesto la necesidad de mejorar las metodologías de enseñanza para alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Además, la alta tasa de repetición y deserción escolar en los primeros grados de primaria tuvo un impacto significativo en los niveles de alfabetización y competencias aritméticas. En 2015, la deserción escolar fue un problema persistente, afectando a varios departamentos, lo que incrementó la diferencia entre la matrícula inicial y la final (Secretaría de Educación, 2018, p. 14). La disminución en la matrícula escolar general del 1.74% indica que menos estudiantes permanecieron en el sistema educativo, lo que agravó las dificultades para mejorar los niveles de alfabetización y habilidades matemáticas (Secretaría de Educación, 2018, p. 9).

Ilustración 5. Tasa de repitencia según grado y sexo, 2015



Fuente: Tomado de Indicadores de Educación, junio 2015. EPHPM, INE

En términos de desigualdades geográficas, las zonas rurales mostraron una desventaja significativa en comparación con las áreas urbanas. La cobertura educativa en zonas rurales fue inferior, con mayores tasas de repetición y reprobación en matemáticas, lo que limitaba las oportunidades de desarrollo académico. Departamentos como Atlántida, Copán y Olancho presentaban las coberturas más bajas, mientras que otros como Choluteca, El Paraíso e Intibucá alcanzaron mejores resultados (FOSDEH, 2015, p. 27).

En cuanto al género, los niños mostraron una tasa de reprobación y repetición más alta que las niñas durante el periodo de 2015, aunque las diferencias en cobertura fueron mínimas, con un ligero predominio de los hombres en la matrícula. Finalmente, aunque no hay detalles específicos sobre las competencias aritméticas entre los grupos étnicos, se sabe que los Garífunas tenían la mayor participación en el sistema educativo durante 2015, mientras que los Pech, Tawahkas y Tolupanes enfrentaban mayores dificultades para acceder a niveles educativos superiores (Secretaría de Educación, 2018, p.21).

Integración de la educación para el desarrollo sostenible, derechos humanos y ciudadanía global

En 2015, la integración de la educación para el desarrollo sostenible (EDS), los derechos humanos y la ciudadanía global en el sistema educativo hondureño presentaba grandes retos. El **Currículo Nacional Básico (CNB)**, que data de 2003, ofrecía algunas directrices hacia una educación integral, pero la implementación práctica de estos conceptos era limitada. Aunque se reconocía la importancia de estos temas en la formación de ciudadanos, la ejecución de políticas educativas que los integraran de manera transversal en todas las disciplinas no era lo suficientemente fuerte ni coherente.

En cuanto a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), los contenidos eran incipientes y no estaban totalmente integrados en el sistema educativo. Aunque el CNB mencionaba la importancia de una educación que promoviera el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, su implementación era desigual. El CNB reconocía la necesidad de fomentar una "cultura de equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo integral de la persona" (Secretaría de Educación, 2003, p. 16), pero no había un esfuerzo coordinado para integrar estos principios en todas las áreas curriculares. La falta de una política educativa coherente que transversalizara la EDS en todas las disciplinas limitaba el impacto educativo en este ámbito. Los intentos por crear conciencia ambiental y promover la sostenibilidad se concentraban en ciertos niveles educativos, sin lograr impregnar todo el sistema educativo.

En relación con la promoción de los derechos humanos, el CNB también trataba este tema, aunque de manera superficial. Aunque se fomentaba una "cultura de paz" y se incluía el respeto a los derechos humanos dentro de los objetivos educativos (Secretaría de Educación, 2003, p. 17), la enseñanza de estos temas no estaba completamente alineada con las realidades de violencia, pobreza y exclusión que muchos estudiantes hondureños enfrentaban en 2015. La falta de recursos y la escasez de programas educativos que abordaran de manera integral los derechos humanos resultaban en una formación insuficiente para muchos estudiantes. El contexto político y social de Honduras, caracterizado por altos niveles de violencia y desigualdad, presentaba desafíos adicionales para la enseñanza efectiva de los derechos humanos en las escuelas.

La **ciudadanía global**, que implica un compromiso con valores universales como la paz, la justicia y el respeto por la diversidad, también estaba en una etapa incipiente de desarrollo en el sistema educativo hondureño. Si bien el CNB reconocía la importancia de fomentar una identidad global y formar ciudadanos comprometidos con su entorno y el mundo, la implementación de estos conceptos era limitada en la práctica (Secretaría de Educación, 2003, p. 20). La enseñanza de la ciudadanía global no estaba integrada de manera sistemática en los programas educativos, y la falta de recursos y formación docente en esta área dificultaba su promoción efectiva.

Finalmente, el **contexto económico** del país en 2015 también afectaba la capacidad de las escuelas para implementar enfoques educativos innovadores. La mayor parte del presupuesto destinado a la educación se usaba para cubrir salarios y gastos operativos, dejando pocos recursos para la innovación educativa o la implementación de programas que promovieran el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la ciudadanía global (Secretaría de Finanzas de Honduras, 2015).

Condiciones de infraestructura educativa

El análisis de la infraestructura educativa en Honduras en 2015 revela importantes desafíos en términos de inversión, cobertura y adecuación a las necesidades de los estudiantes. A través del Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE), se estableció que era necesario invertir 15,123 lempiras por alumno para cerrar el déficit de infraestructura y cumplir con las metas educativas nacionales. Este sistema forma parte del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, el cual evalúa la condición actual de las instalaciones y establece las necesidades para lograr una educación de calidad (Foro DAKAR Honduras, 2018, p. 49).

En cuanto al acceso a servicios básicos, solo el 68% de las escuelas contaban con acceso a agua potable y el 56% con acceso a electricidad. Además, un 13% de los centros no disponía de ningún sistema de evacuación de aguas negras, lo que evidencia las carencias en las condiciones básicas de infraestructura (Foro DAKAR Honduras, 2018, p. 50). Morales (2024) enfatiza que estas deficiencias no solo limitan la calidad educativa sino que también afectan la seguridad y el bienestar de los estudiantes, particularmente en áreas rurales donde las condiciones son más precarias.

En términos normativos, a partir de 2015, todas las nuevas construcciones educativas debían cumplir con estándares que incluían la accesibilidad para personas con discapacidad, como la instalación de rampas y baños adaptados (Foro DAKAR Honduras, 2018, p. 52). Estas iniciativas alinean a Honduras con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4.a, que promueven la construcción de instalaciones inclusivas, seguras y adaptadas a las necesidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad (UNICEF, 2018, p. 63). Sin embargo, Morales (2024) señala que la implementación de estos estándares fue limitada debido a la falta de recursos financieros y la ausencia de un seguimiento adecuado, lo que resultó en desigualdades en la calidad de las instalaciones entre las regiones urbanas y rurales.

Por otro lado, persistían importantes limitaciones presupuestarias que afectaban la capacidad del país para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. Aunque existían redes educativas con bibliotecas y servicios médicos, muchas instalaciones no estaban preparadas para conectarse a internet, y en general, las condiciones no eran óptimas para proporcionar un entorno de aprendizaje moderno y seguro (UNICEF, 2018, p. 74). Morales (2024)

destaca que la falta de inversión estructural sostenida perpetuó un entorno de aprendizaje inadecuado y, en algunos casos, peligroso, lo que impactaba desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables.

La calidad educativa está directamente relacionada con la infraestructura disponible en las escuelas, que incluye bibliotecas, acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC), canchas deportivas, baños adecuados y agua potable. La infraestructura adecuada es esencial para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, respetuoso y tolerante (UNICEF, 2018, p. 66). En cuanto al financiamiento destinado a la infraestructura educativa, el sistema de Honduras en 2015 contaba con 22,978 centros educativos, de los cuales 21,087 eran gubernamentales y 1,891 pertenecían al sector no gubernamental (Secretaría de Educación, 2015).

Sin embargo, la falta de financiamiento sostenido y estructurado para el mantenimiento y la mejora de estas instalaciones seguía siendo un problema central para mejorar la calidad educativa en el país (Secretaría de Finanzas, 2015). Morales (2024) subraya que esta insuficiencia presupuestaria contribuyó a la persistencia de desigualdades en el acceso a una educación de calidad, especialmente en regiones rurales que carecían de infraestructura básica.

Disponibilidad y acceso a becas para estudios superiores

En 2015, la disponibilidad y el acceso a becas para estudios superiores en Honduras presentaban una serie de desafíos estructurales que impactaban negativamente en las oportunidades de los jóvenes, especialmente aquellos provenientes de sectores vulnerables, para acceder a la educación superior, la oferta de becas era limitada, y su acceso se veía afectado por factores socioeconómicos y geográficos, perpetuando así las desigualdades existentes en el país.

El informe sobre la educación superior en Iberoamérica de 2016, que incluye datos hasta 2015, revela que Honduras contaba con un sistema de becas que, aunque indispensable para muchos estudiantes, era insuficiente para cubrir la demanda. Las principales universidades del país, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), ofrecían becas académicas, deportivas, y socioeconómicas. Sin embargo, eran limitadas en número y montos, lo que restringía su impacto en la ampliación del acceso a la educación superior (Duriez et al., 2016, p. 104).

En 2015, la UNAH, que es la institución educativa pública más grande del país, otorgó becas a 1,348 estudiantes, lo cual representaba un pequeño porcentaje del total de su matrícula. Las becas disponibles en la UNAH incluían opciones como la beca académica, la beca deportiva, y la beca artística, entre otras. Sin embargo, la mayoría de estas becas cubrían solo una parte de los costos educativos, dejando a los estudiantes con la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento para cubrir gastos adicionales como transporte, materiales, y alojamiento (Duriez et al., 2016, p. 105).

La desigualdad en el acceso a las becas también se reflejaba en la distribución geográfica y socioeconómica de los beneficiarios. La mayoría de los estudiantes que recibían becas provenían de áreas urbanas y de familias con un nivel socioeconómico medio, mientras que los estudiantes de zonas rurales y de hogares en condiciones de pobreza extrema enfrentaban mayores barreras para

acceder a estas ayudas. Esta situación se debía en parte a la falta de información y orientación en las escuelas secundarias rurales, donde muchos estudiantes desconocían las oportunidades de becas o no tenían los medios para cumplir con los requisitos necesarios para solicitarlas (Espino, 2015, p. 45).

Otro aspecto crítico era la transparencia y equidad en la asignación de becas. A pesar de que las instituciones como la UNAH y la UPNFM tenían establecidos procedimientos para la selección de becarios, existían preocupaciones sobre la falta de transparencia en estos procesos. Los estudiantes y sus familias a menudo expresaban desconfianza en la equidad de las decisiones de asignación, lo que desmotivaba a algunos potenciales solicitantes. Además, la falta de un sistema centralizado de información sobre becas y ayudas financieras dificultaba que los estudiantes accedieran a información clara y completa sobre las opciones disponibles (Duriez et al., 2016, p. 105). La falta de recursos financieros suficientes no solo limitaba el número de becas otorgadas (Secretaría de Finanzas de Honduras, 2015), sino que también afectaba la calidad de la educación recibida por los estudiantes becados, quienes a menudo tenían que trabajar para complementar los recursos proporcionados por las becas.

A pesar de estas limitaciones, las becas seguían siendo un instrumento vital para permitir que algunos estudiantes accedieran a la educación superior. En este sentido, el informe de la UNAH destacaba la importancia de las becas no solo para el acceso a la educación, sino también para la retención y el éxito académico de los estudiantes. Las becas contribuían a reducir las tasas de deserción, aliviando parte de la carga económica que enfrentan los estudiantes de bajos ingresos. No obstante, el alcance limitado de estos programas de becas significaba que muchos estudiantes seguían sin poder beneficiarse de ellos, perpetuando así las desigualdades educativas en el país (Duriez et al., 2016, p.106).

Formación y desarrollo profesional de docentes

En 2015, la formación y el desarrollo profesional de docentes en Honduras eran temas críticos, especialmente considerando los desafíos que enfrentaba el país en términos de calidad educativa y equidad. Los docentes son el pilar fundamental de cualquier sistema educativo, y su formación y desarrollo profesional son determinantes para garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad. Sin embargo, en Honduras, la formación inicial y continua de los docentes presentaba múltiples deficiencias que limitaban su capacidad para mejorar los resultados de aprendizaje y enfrentar los retos del siglo XXI.

La formación inicial de los docentes en Honduras, particularmente en la educación básica y media, estaba marcada por una falta de estandarización y coherencia en los programas de formación. Las instituciones formadoras de docentes, que incluían universidades públicas como la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y varias escuelas normales, ofrecían programas con variaciones significativas en calidad y contenido. Aunque la UPNFM, como principal institución dedicada a la formación de docentes, mantenía ciertos estándares, la dispersión y heterogeneidad de la formación en otras instituciones creaba un sistema fragmentado donde no todos los futuros maestros recibían la preparación adecuada para enfrentar los desafíos del aula (Duriez et al., 2016, p. 108). Además, según Morales, la reforma educativa implementada no logró consolidar mejoras significativas, ya que los programas de formación no siempre eran pertinentes

ni adecuadamente actualizados, lo que afectaba la capacidad de los maestros para mejorar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes (Morales, 2024).

El contexto socioeconómico y la infraestructura educativa del país también influyeron en la calidad de la formación docente. Muchas instituciones carecían de los recursos necesarios para ofrecer una formación completa y actualizada, incluyendo laboratorios, bibliotecas y acceso a tecnologías educativas modernas. Esta carencia de recursos dificultaba que los futuros docentes adquirieran competencias en áreas esenciales como el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza, un aspecto cada vez más importante en el entorno educativo global (Espino, 2015, p. 50). Morales añade que estas limitaciones en la infraestructura educativa afectaban directamente la capacidad de los docentes para aplicar metodologías de enseñanza efectivas, especialmente en las zonas rurales donde las condiciones eran más precarias (Morales, 2024).

En cuanto al desarrollo profesional continuo, los docentes en servicio enfrentaban barreras significativas para acceder a oportunidades de capacitación y actualización. Aunque existían programas de formación continua ofrecidos por el gobierno y algunas universidades, la participación en estos programas era limitada, en parte debido a la falta de incentivos y a las dificultades logísticas, como la distancia geográfica y los costos asociados. En muchas ocasiones, los docentes, especialmente aquellos en zonas rurales, tenían pocas o ninguna oportunidad de participar en capacitaciones que les permitieran mejorar sus prácticas pedagógicas y actualizarse en nuevas metodologías de enseñanza (FOSDEH, 2022, p. 77). Morales enfatiza que esta falta de acceso a la formación continua exacerbaba las desigualdades entre los docentes urbanos y rurales, perpetuando la brecha educativa en el país (Morales, 2024).

La falta de un sistema nacional robusto de formación continua y desarrollo profesional para los docentes exacerbaba las desigualdades entre los maestros que podían acceder a estas oportunidades y aquellos que no. Los docentes en áreas urbanas, que tenían mejor acceso a recursos educativos y redes profesionales, tendían a estar mejor capacitados que sus colegas en zonas rurales, perpetuando así las desigualdades en la calidad de la educación ofrecida en diferentes partes del país. Esta disparidad en la formación y el desarrollo profesional tenía un impacto directo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo a la brecha educativa entre áreas urbanas y rurales (Duriez et al., 2016, p. 109).

La situación financiera también jugaba un papel crucial en la formación y el desarrollo profesional de los docentes. El presupuesto destinado a la educación en Honduras, aunque considerable en términos de porcentaje del gasto público, estaba principalmente orientado hacia los salarios y gastos corrientes, dejando pocos recursos disponibles para la inversión en programas de desarrollo profesional docente. Morales señala que esta distribución inadecuada del presupuesto educativo, con una proporción significativa destinada a salarios en lugar de mejoras estructurales y programas formativos, limitaba gravemente la capacidad de los docentes para mejorar sus habilidades y conocimientos (Morales, 2024; Secretaría de Finanzas de Honduras, 2015).

El marco normativo para la formación docente también mostraba áreas de mejora. Aunque la Ley Fundamental de Educación establecía la importancia de la formación docente a nivel de

licenciatura para todos los maestros en el sistema educativo, en la práctica, muchos docentes en servicio no cumplían con estos requisitos, especialmente aquellos que habían ingresado al sistema antes de la implementación de la ley. Además, la implementación de la ley se veía obstaculizada por la falta de recursos y la resistencia a la profesionalización en algunos sectores educativos, lo que resultaba en un sistema donde la formación y el desarrollo profesional no siempre estaban alineados con las necesidades reales del país (Duriez et al., 2016, p. 110).

Parte 2

¿Qué pasó entre el año 2015 y la actualidad (2023)?

Retos y caminos hacia la inclusión y la calidad

De transiciones político institucionales y pandemias

El período transcurrido desde el 2015 a la fecha ha sido un tiempo de fuerte convulsión política en Honduras, atravesado por gobiernos de diferentes signos, orígenes y representaciones. El Partido Nacional gobernó dos períodos bajo la figura de Juan Orlando Hernández (2014-2022). En noviembre de 2021 gana las elecciones el partido Libertad y Refundación (Libre), y en enero de 2022 asume el Poder Ejecutivo Xiomara Castro de Zelaya. Primer mujer en asumir la más alta responsabilidad gubernamental en la historia de Honduras. Las diferencias expresadas en la práctica política en general, entre ambos agrupamientos, también se expresaron en el discurso y la implementación de las políticas educativas. Y, si bien los problemas de la educación reconocen un hilo de continuidad, no han sido similares las respuestas ensayadas por las distintas gestiones.

Es imposible dejar de considerar que entre los años 2020 y 2022 Honduras, y todo el mundo, atravesaron la pandemia del COVID-19. Este acontecimiento que se extendió simultáneamente a toda la población del planeta dejó en evidencia las condiciones preexistentes, empeorándolas, debido al confinamiento que gran parte de la sociedad debió asumir. Durante la Covid-19 se presenta una disminución considerable de los ingresos en las familias, a raíz del confinamiento social como medida impuesta para enfrentar el contagio de la pandemia (IIES, 2020). Tal panorama ha provocado una recesión económica en los hogares, producto del cierre de operaciones en diversas empresas, sean éstas micro, pequeñas o medianas, lo que ha generado que se obtengan menores ingresos para satisfacer las necesidades de los hondureños.

Tras los primeros brotes de la pandemia, se cerraron las escuelas en 180 países, entre ellos Honduras. Millones de niños, niñas y adolescentes se quedaron sin acceso a clases de calidad durante los cierres de escuelas y el cambio a la educación virtual. El costo de la pandemia fue enorme en términos de aprendizaje y de deserción escolar.

Al igual que en otros países, Honduras tomó acciones en el ámbito educativo como una forma de mitigar los efectos de la pandemia en la población. A nivel mundial, como medida para

evitar la propagación del virus se optó por cerrar millones de establecimientos educacionales (UNESCO, 2020). Las autoridades educativas hondureñas, siguiendo estas propuestas, decidieron, el 12 de marzo de 2020 suspender las actividades presenciales de manera indefinida en los niveles de educación Prebásica, Básica, Media (Decreto N° PCM-018-2020, 2020) y Superior con el fin de llevar a cabo clases a distancia mediante el uso de dispositivos tecnológicos (Espinoza, 2020). Los cambios en las vías de acceso a la educación derivaron en una serie de propuestas gubernamentales para aplacar los efectos de la pandemia.

Para combatir los efectos de la Covid-19, el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, puso en práctica una iniciativa como estrategia marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de dar continuidad al aprendizaje del estudiantado en los hogares, denominada “Te Queremos Estudiando desde Casa”. Su esencia ha estado concentrada en promover la implementación de una serie de medidas que faciliten el apoyo directo a los progenitores, tutores o encargados, de manera que esté coordinada por el profesorado. También se debe agregar que, para su establecimiento, se han constituido diferentes formas de entrega del bien social, entre ellas: clases virtuales, cuadernos de trabajo y acciones de proceso (clases radiales y cartillas interactivas para el primero y segundo en educación prebásica). Sin embargo, una política educativa dicotómica, sin orientaciones claras y no sistémica en la coyuntura de la crisis fue causa de no desarrollar integralmente el derecho fundamental educativo y un proceso de calidad dirigido a la sociedad hondureña. Más aún, tuvo dificultades en construir un marco escolar que minimizara los efectos negativos de la crisis en la educación (Mejía-Elvir 2021).

Entre 2015 y 2023, la educación en Honduras ha pasado por momentos complejos que han afectado el aprendizaje y la llegada de recursos escolares a muchos niños y jóvenes. A pesar de algunos avances en la recuperación de la matrícula realizados en los últimos dos años, más de 700,000 niños y jóvenes siguen sin poder asistir a clases regulares. Esto configura un escenario de desigualdad persistente en el acceso a la educación, especialmente para grupos vulnerables como los pueblos originarios y las comunidades rurales. La pobreza y la falta de recursos son factores clave que siguen limitando el acceso a la escuela, dejando a muchos sin la oportunidad de aprender.

La calidad de la educación también se identifica como un desafío a resolver. Según evaluaciones nacionales e internacionales, los estudiantes en Honduras no están alcanzando buenos resultados en materias básicas como matemáticas y español. A pesar de los esfuerzos por mejorar la preparación de los maestros y las escuelas, el aprendizaje no ha mejorado notablemente. Esto significa que los estudiantes no están adquiriendo las habilidades necesarias para su futuro.

Las estrategias de planificación

Para enfrentar estos problemas, se fueron activado diversas políticas y programas dirigidas a mejorar la educación en Honduras. El Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) 2018-2030 fue la herramienta institucional del gobierno del momento pensado como un paso hacia la modernización del sistema, con la pretensión de asegurar una educación inclusiva y de calidad.

Con el cambio de gestión en 2022, se comenzó a trabajar en el diseño del Plan Estratégico para la Refundación del Sistema Educativo de Honduras (PRESENA). Este instrumento ha sido coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación (CONED) con la participación de

diversas organizaciones gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Educación. El objetivo es su implementación entre los años 2024 y 2033. Por otro lado, la Secretaría de Educación sistematizó sus intervenciones en el denominado “Plan 365”, sostenido en tres pilares, seis elementos y cinco objetivos.

El camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, requiere del mantenimiento y ampliación de políticas públicas educativas y del fortalecimiento de alianzas entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para poder garantizar un futuro educativo más justo y sostenible en Honduras.

Cobertura y calidad educativa en primaria y secundaria

Honduras ha logrado avances en la cobertura educativa, especialmente en la educación primaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cobertura en educación básica alcanzó el 82% en los ciclos I y II, y un 18% de la población, es decir, más de 194,173 niños, permanece fuera del sistema educativo (INE, 2023). La situación se torna más preocupante en el ciclo III (noveno grado), donde solo un 45.5% de los jóvenes están matriculados, lo que significa que más de la mitad de los jóvenes en esta edad no accede a ella (Secretaría de Educación, 2023).

Alexis Ordoñez (2024) destaca que, aunque la matrícula en algunos niveles muestra leves mejoras, los avances en cobertura no han sido suficientes para revertir las caídas significativas observadas durante y después de la pandemia. La cobertura educativa sigue siendo desigual, con el Distrito Central mostrando los valores más altos y las zonas rurales, los más bajos, lo que refleja una necesidad urgente de intervenciones específicas en áreas marginadas.

Tabla 3. Matrícula anual en educación primaria

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,545,938	1,527,007	1,520,314	1,490,997	1,459,662	1,407,516	1,433,165	1,442,424

Fuente: SACE / USINIEH

Según un estudio de CEPAL y UNICEF (2023), el estancamiento de las tasas de escolarización en todos los grupos de edad se manifiesta cuando aún se está muy lejos de la meta deseada, al menos en las edades correspondientes al ciclo escolar obligatorio, de una escolarización del 100%. Ello alerta sobre la necesidad de prestar especial atención a los factores estructurales que pueden estar operando como obstáculos a la escolarización. Ordoñez (2024) agrega que, a pesar del aumento en términos absolutos del presupuesto educativo en los últimos años, la inversión sigue priorizando los gastos operativos y salariales sobre las inversiones en calidad educativa y cobertura. Esto ha resultado en una disminución proporcional en relación con el Presupuesto General de la República, afectando la capacidad del sistema para abordar las desigualdades y las necesidades específicas de la población estudiantil.

Si se analiza cuál es la situación actual respecto al año inmediatamente anterior a la pandemia (2019), se puede apreciar que todos los grupos de edad muestran una reducción en las tasas de escolarización. Los grupos de edad que menos se redujeron son los que corresponden a los tres

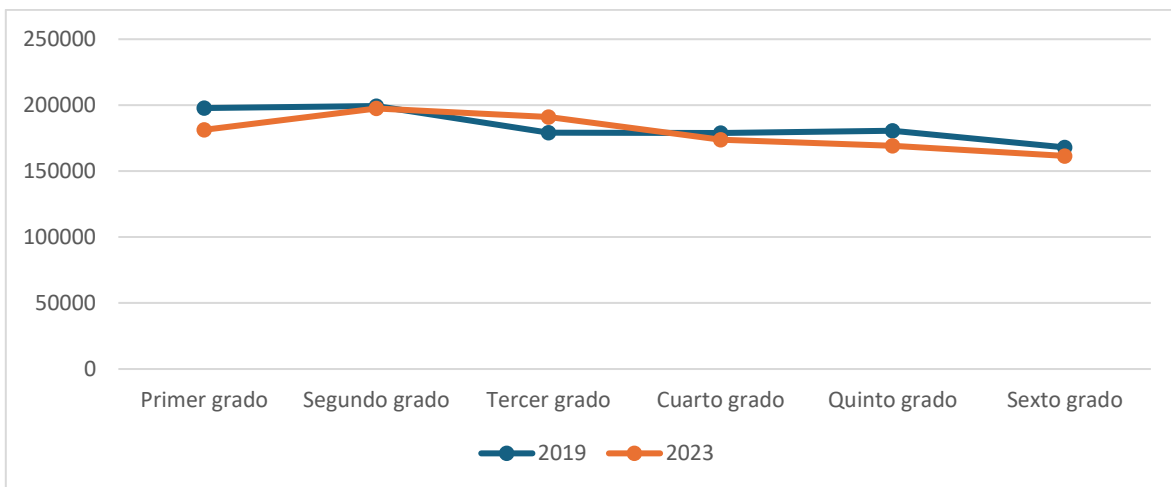
ciclos de educación básica (de 6 a 14 años), donde se percibe una baja del 0.2% anual. La reducción es más intensa entre quienes tienen edad de asistir a Prebásica (0.9% anual) y al nivel medio (1% anual) (CEPAL-UNICEF, 2023, p. 6).

Tabla 4. Matricula anual en educación media

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
250,898	255,533	255,131	239,085	228,373	216,891	207,975	212,337

Fuente: SACE / USINIEH

A partir de los datos de la SACE/USINIEH, en cuanto a la educación media se observa una tendencia marcada en la reducción de la matrícula, coincidiendo con lo señalado por CEPAL y UNICEF sobre la caída más intensa en las tasas de escolarización de este grupo de edad. En 2016, la matrícula era de 250,898 estudiantes, y para 2022, esta cifra disminuyó a 207,975, lo que representa una reducción significativa, alineada con la caída anual del 1% mencionada en los estudios. Aunque en 2023 se percibe una leve recuperación a 212,337 estudiantes, Ordoñez (2024) señala que estos esfuerzos deben intensificarse para recuperar a los jóvenes que abandonaron la educación durante la pandemia y quienes se vieron obligados a trabajar para apoyar a sus familias en un contexto de crisis económica. Ilustración 3. Comparativa 2019 - 2023 en la matrícula de primer y segundo ciclo de educación básica



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SACE / USINIEH

En cuanto a la calidad educativa, los resultados de las mediciones de las áreas clave como matemáticas y español son preocupantes. Un informe de la Secretaría de Educación (2022) indica que alrededor del 60% de los estudiantes evaluados en estas materias se encuentran en niveles de desempeño "Debe Mejorar" e "Insatisfactorio". Esto subraya la necesidad de implementar estrategias efectivas que mejoren tanto la calidad de la enseñanza como el aprendizaje en las aulas. Ordoñez (2024) enfatiza que, a pesar de las iniciativas en capacitación docente y mejora de infraestructura escolar, el impacto ha sido insuficiente, y los niveles de competencia de los estudiantes siguen siendo inadecuados para su desarrollo integral.

La promoción de la educación técnica y profesional, la universalización de la alimentación escolar, el fortalecimiento de los programas de educación rural, la campaña de alfabetización para adultos, la rehabilitación de planteles escolares y escuelas abandonadas por muchos años, la construcción de nuevos espacios de prebásica, básica y media por parte de Construcciones Escolares, la Matrícula Gratis, y los acuerdos con diversos organismos internacionales de financiamiento y cooperación buscan avanzar sobre las necesidades educativas de la población en general. Sin embargo, Ordoñez (2024) subraya que estas medidas deben ir acompañadas de una reestructuración del gasto público para maximizar su impacto y garantizar una educación más equitativa y de calidad.

El desafío de poder reducir las desigualdades, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad sigue plenamente vigente e irresuelto.

Acceso y calidad en la atención y educación en la primera infancia

En los últimos años, Honduras ha realizado esfuerzos importantes para mejorar el acceso a la educación en la primera infancia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2023), la cobertura de la educación preescolar ha aumentado al 59% en 2023, en comparación con el 39.48% en 2015.

A pesar de estos avances, la calidad de la atención y educación en la primera infancia sigue siendo un reto. Un informe de la Secretaría de Educación (2022) revela que muchos centros preescolares carecen de los recursos y materiales necesarios, lo que afecta la calidad de la enseñanza. La formación de los docentes en este nivel no siempre cumple con los estándares requeridos, limitando la efectividad de los programas educativos. La falta de infraestructura adecuada y un entorno de aprendizaje seguro también contribuyen a la baja calidad en la atención a la primera infancia.

Tabla 5. Comparativo de matrícula en educación Prebásica, 2016 - 2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Primer grado	15,640	11,587	12,633	13,956	10,608	10,687	14,923	18,499
Segundo grado	73,060	64,122	61,259	60,738	51,230	39,875	48,280	59,587
Tercer grado	146,993	170,451	168,929	161,280	171,581	150,350	143,010	130,192

Fuente: SACE / USINIEH

Las políticas abordadas en los últimos años no han podido resolver los problemas fundamentales que presenta la educación prebásica. El Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) del 2018, incluyó estrategias para fortalecer el nivel, mencionando la capacitación de docentes y la mejora de la infraestructura educativa (Gobierno de Honduras, 2018). En los últimos años se han promovido iniciativas que integran la atención en salud y nutrición con la educación, reconociendo que el desarrollo integral de los niños requiere un enfoque holístico que atienda sus necesidades en múltiples dimensiones (FEREMA, 2022). La implementación del Proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación prebásica en Honduras, financiado por un préstamo del Banco Mundial y la donación del GPE, abordan de manera limitada cuestiones vinculadas al modelo de calidad de la

educación prebásica, la formación docente, el fortalecimiento del nivel, y la construcción de nuevas salas y la reparación de otras.

Sin embargo persisten profundas brechas de desigualdad de la calidad de los servicios ya que se ha consolidado un modelo fragmentado de modalidades, que varían en la formación de los educadores, las modalidades de contratación y continuidad de estos, los montos que perciben, las instalaciones educativas, el mobiliario, el material fungible y didáctico.

Tabla 6. Modalidades de educación Prebásica y su respectiva matrícula, 2023

CCEPREB	37.826
CEPB UNIVERSALIZACION	12.816
CEPB COMÚN	132.917
CEPB PROHECO	24.977
TOTAL MATRICULA	208.536

Fuente: SACE / USINIEH

Tabla 7. Total de centros educativos por administración y su respectiva matrícula, 2023

Centros Gubernamentales	Centros no Gubernamentales
Total de centros: 9.775	Total de centros: 1.012
Matrícula: 180.129	Matrícula: 28.407

Fuente: SACE / USINIEH

Los servicios destinados a los niños y niñas de 0 a 3 años no son administrados por la Secretaría de Educación, sino por otro organismo específico, observándose dificultades en la coordinación intergubernamental.

A pesar de los avances, resulta esencial seguir trabajando en la mejora de la calidad educativa y la expansión del acceso a la educación en la primera infancia, asegurando un futuro prometedor para los niños hondureños.

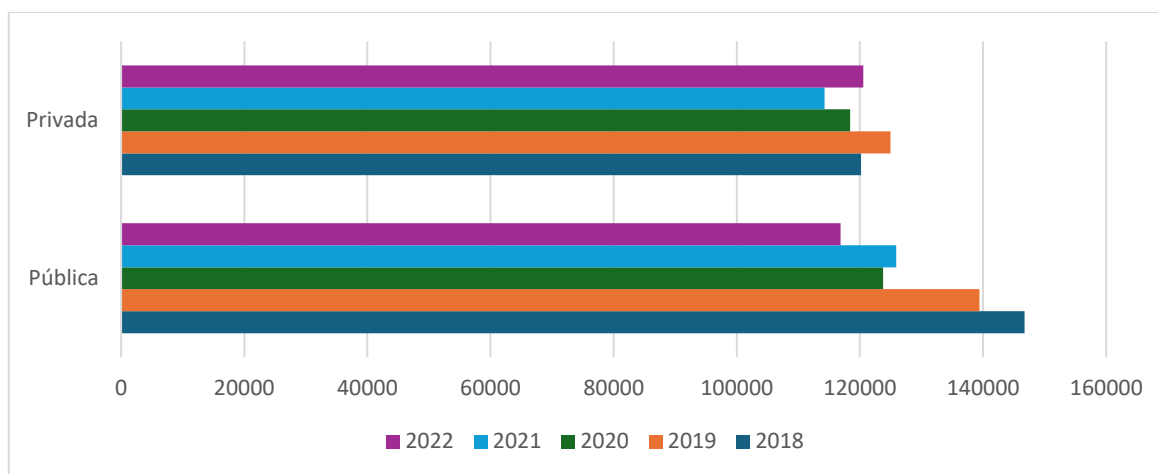
Acceso y calidad en la formación técnica, profesional y superior

Según el informe de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA, 2022), se ha incrementado la atención a la Población Económicamente Activa (PEA) con formación técnica profesional. En 2020, el porcentaje de la PEA que recibió formación técnica alcanzó un 6%. Este número experimentó un ligero aumento en 2021, alcanzando el 6.88%, reflejando un esfuerzo coordinado por parte del gobierno y las instituciones educativas para ofrecer programas de formación que respondan a las necesidades del mercado laboral y contribuyan al desarrollo económico del país (FEREMA, 2022). Sin embargo, en 2022, se observó una disminución en la cobertura de formación técnica, cayendo al 5.97% de la PEA, lo que pone de manifiesto los desafíos estructurales en la sostenibilidad de estos programas. Aunque no se encontraron datos definitivos

para 2023, las estimaciones sugieren que el porcentaje de la PEA atendida se mantendría en un rango entre el 5% y el 6%, lo que indica una estabilización en los niveles de formación técnica para la PEA.

En cuanto a la calidad de la formación técnica y profesional, se han implementado programas que buscan mejorar la capacitación de los docentes y la infraestructura de las instituciones educativas. El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) ha trabajado en la elaboración de normas técnico-docentes y reglamentos que regulan la gestión de la formación profesional, asegurando que estas se alineen con las demandas del mercado (Gobierno de Honduras, 2018). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el informe de la Secretaría de Educación (2022) señala que aún persisten desafíos en la calidad educativa, ya que muchos programas no logran cumplir con los estándares requeridos para una formación efectiva.

Ilustración 4. Estudiantes universitarios por tipo de administración, 2018 - 2022



Fuente: Dirección de Educación Superior de Honduras, 2024

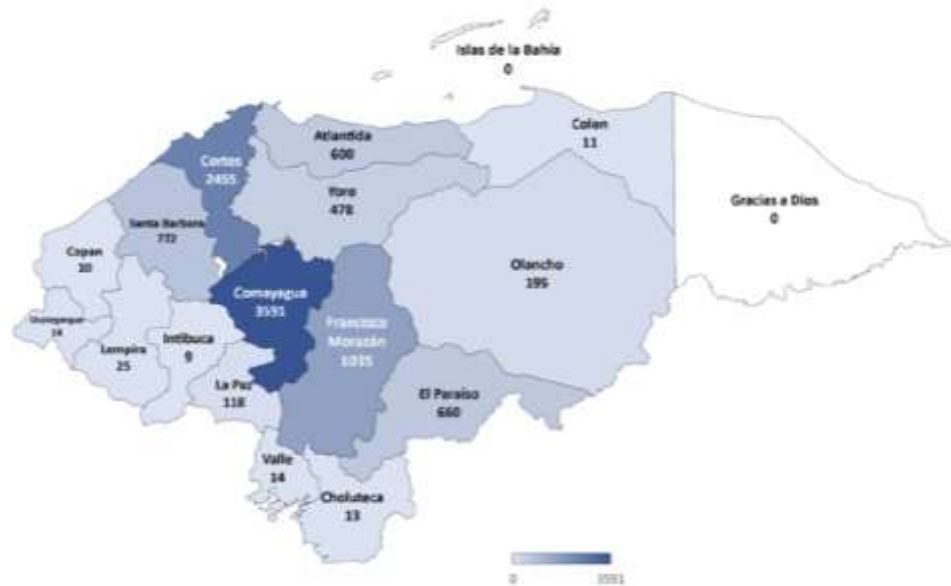
En el ámbito de la educación superior, se han realizado esfuerzos para aumentar la matrícula y mejorar la calidad de la enseñanza. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2023), la cobertura en educación superior ha mostrado un crecimiento, aunque sigue siendo insuficiente, con solo el 24.9% de los jóvenes matriculados en este nivel. El financiamiento también sigue siendo un desafío por superar. Por ejemplo, en 2023, la UNAH, la principal institución de educación superior del país, recibió únicamente el 2% del presupuesto, a pesar de que la constitución establece que debería recibir el 6% del presupuesto general de la nación.

Esta limitación afectó su capacidad para expandir la oferta académica y mejorar las condiciones de enseñanza e investigación (UNAH, 2023). El subfinanciamiento ha impactado no solo la calidad educativa, sino también las iniciativas de investigación y el crecimiento institucional, aspectos fundamentales para fortalecer el capital humano del país y su competitividad a nivel regional. A pesar de estas limitaciones, se han implementado iniciativas para fomentar la investigación y la producción científica en las universidades, elementos clave para elevar la calidad educativa y contribuir al desarrollo del país (FEREMA, 2022).

Es crucial que el Estado continúe invirtiendo en la educación técnica, profesional y superior, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a una formación de calidad que les permita mejorar sus oportunidades laborales y contribuir al desarrollo sostenible de Honduras.

Formación y desarrollo de competencias técnicas y profesionales

Ilustración 5. Beneficiarios del programa Jóvenes construyendo el futuro



Fuente: Tomado del documento “Nuestras voces, desde abajo: diagnóstico sobre los resultados de los proyectos sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro”, 2023

Entre 2016 y 2023, Honduras ha avanzado en la capacitación técnica y profesional de jóvenes y adultos, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y acceso a trabajos decentes. A través de programas como *Jóvenes Construyendo el Futuro*, el país ha buscado promover la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 29 años, otorgándoles incentivos económicos y capacitación práctica. Este esfuerzo ha sido complementado por iniciativas como *ProJoven*, que ha atendido a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, proporcionando formación técnica y profesional para facilitar su acceso al mercado laboral. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, el déficit de competencias necesarias sigue siendo un desafío recurrente. Los empleadores han reportado dificultades para encontrar personal con las habilidades técnicas y profesionales adecuadas, lo que se atribuye en parte a las deficiencias del sistema educativo hondureño (Informe Empleo Juvenil y Emprendimiento en América Latina y el Caribe, 2022).

Además, durante este periodo, el emprendimiento ha sido una vía creciente para la empleabilidad juvenil. Programas como *Chamba Joven* han impulsado pasantías remuneradas, permitiendo que los jóvenes adquieran experiencia laboral en sectores públicos y privados. Sin embargo, la falta de una educación técnica adaptada a las demandas específicas del mercado laboral ha limitado las oportunidades de acceso a empleos de calidad para muchos jóvenes. Según el análisis

de Advance (2017), aunque algunos jóvenes muestran competencias en áreas tecnológicas y de redes sociales, las habilidades transversales, como la comunicación y la resolución de problemas, son cada vez más valoradas por los empleadores, quienes reportan que más del 50% de las empresas consideran estas competencias esenciales para sus trabajadores (Informe Empleo Juvenil y Emprendimiento en América Latina y el Caribe, 2022; Informe de Progreso Educativo Honduras, 2022).

Equidad en el acceso a la educación y formación para grupos vulnerables

La evolución en la equidad del acceso a la educación en Honduras muestra avances importantes, pero persisten desafíos significativos, especialmente para los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las poblaciones rurales y las comunidades en situación de pobreza. En los últimos años, se han implementado políticas y programas destinados a aumentar la cobertura educativa, particularmente en los ciclos I y II de la educación básica, donde la matrícula escolar alcanzó el 82%, según la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA, 2022). Sin embargo, la cobertura cae drásticamente al 45.5% en el ciclo III (noveno grado), lo que indica que más de la mitad de los jóvenes no acceden a esta etapa educativa, reflejando las desigualdades estructurales en el sistema educativo (Gobierno de Honduras, 2018).

El acceso a la educación para las personas con discapacidad y los pueblos indígenas sigue siendo limitado, a pesar de la implementación de modelos educativos inclusivos como el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que busca atender las necesidades culturales y lingüísticas de las comunidades indígenas. A pesar de estos esfuerzos, la cobertura es insuficiente y los docentes no siempre cuentan con la formación adecuada para impartir educación en contextos bilingües y multiculturales. Además, muchas de las escuelas en zonas rurales carecen de infraestructura y recursos suficientes para implementar plenamente estos modelos (Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, 2019).

Alexis Ordoñez (2024) señala que, en 2022, la matrícula de estudiantes con necesidades especiales aumentó en 10,470 educandos en comparación con 2021, alcanzando un total de 30,442 estudiantes. Sin embargo, subraya que este incremento aún no compensa las barreras persistentes, como la falta de infraestructura adaptada y la escasez de recursos educativos inclusivos en muchas escuelas, especialmente en áreas rurales. La insuficiencia de inversión en tecnología y herramientas de apoyo sigue afectando la capacidad de los estudiantes con discapacidades para acceder a una educación de calidad.

La situación es aún más preocupante para los sectores más pobres de la población. Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ, 2022), el 64.3% de los hogares hondureños se encuentran en situación de pobreza, lo que impacta directamente en su acceso a la educación. La tasa de analfabetismo es significativamente más alta en áreas rurales y entre los grupos indígenas, lo que limita las oportunidades educativas y laborales de estos sectores de la población. Estas barreras se agravan por la falta de infraestructura adecuada y la escasez de programas de formación profesional en las zonas más desfavorecidas (ASJ, 2022).

En términos de disparidades de género, aunque se han dado pasos para promover la igualdad en el acceso a la educación, las niñas en áreas rurales y de bajos ingresos siguen enfrentando

mayores obstáculos para continuar con su educación, especialmente en niveles superiores. El Programa Estratégico del Sector Educación (PESE) establecía la necesidad de eliminar las disparidades de género y asegurar el acceso igualitario para todos los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y los pueblos indígenas (Gobierno de Honduras, 2018). No obstante, el informe de la UNESCO (2019) destaca que, a pesar de los avances, las desigualdades en el acceso persisten, subrayando la necesidad de seguir trabajando en políticas que aborden estas brechas. Ordoñez (2024) también enfatiza que, a pesar de los aumentos en la matrícula de estudiantes con necesidades especiales, aún se requiere un enfoque más robusto y sostenido para garantizar un entorno educativo inclusivo y accesible.

Nivel de alfabetización y competencias en aritmética básica

Según el informe de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA, 2022), la tasa de alfabetización ha mostrado una leve mejora, pasando del 12.09% en 2015 al 11.75% en 2017. Sin embargo, el analfabetismo sigue siendo un problema significativo, especialmente en áreas rurales, donde la tasa alcanza el 20.8% (Foro Dakar Honduras, 2023). Esto indica que, a pesar de los esfuerzos realizados, aún hay un porcentaje considerable de la población que carece de habilidades básicas de lectura y escritura.

En cuanto a las competencias en aritmética básica, los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales son preocupantes. El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2018 revela que el 85% de los estudiantes hondureños no logra el estándar en matemáticas, ubicando al país en los últimos lugares de la región (ASJ, 2022). Además, el informe de la UNESCO (2019) destaca que los estudiantes hondureños de 15 años presentan un atraso académico de 3 años en comparación con sus pares de Chile, lo que refleja la necesidad urgente de mejorar la calidad de la enseñanza en matemáticas y aritmética básica.

A pesar de los esfuerzos por mejorar la educación, la calidad de los aprendizajes sigue siendo un desafío crítico. El informe de FEREMA (2022) señala que más del 60% de los estudiantes evaluados en matemáticas se clasifican en niveles de desempeño "Debe Mejorar" o "Insatisfactorio". Esto indica que, aunque se han implementado programas de alfabetización y formación técnica, es fundamental fortalecer la capacitación docente y mejorar la infraestructura educativa para garantizar que todos los estudiantes adquieran las competencias necesarias en aritmética básica y otras áreas fundamentales (Gobierno de Honduras, 2018).

Integración de la educación para el desarrollo sostenible, derechos humanos y ciudadanía global

Los esfuerzos realizados para integrar la educación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la ciudadanía global en su sistema educativo han sido importantes, según el Plan PESE, se han implementado programas que buscan promover la educación en derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, con el objetivo de formar ciudadanos responsables y comprometidos (Gobierno de Honduras, 2018). Sin embargo, la implementación efectiva de estos programas aún enfrenta desafíos, ya que la capacitación docente en estos temas es insuficiente y la infraestructura educativa no siempre apoya un aprendizaje integral.

A pesar de los avances, los resultados en la enseñanza de derechos humanos y ciudadanía global son preocupantes. El informe de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA, 2022) destaca que solo el 30% de los estudiantes en el ciclo básico alcanzan niveles satisfactorios en competencias relacionadas con derechos humanos y ciudadanía. Esto indica que, aunque se han establecido políticas y marcos normativos, la calidad de la educación en estos temas no se ha traducido en un aprendizaje efectivo para los estudiantes. Además, la falta de recursos y materiales didácticos adecuados limita la capacidad de las escuelas para impartir estos contenidos de manera efectiva.

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los desafíos en la integración de la educación para el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Según el informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ, 2022), el cierre prolongado de escuelas y la falta de acceso a recursos tecnológicos han afectado la continuidad de la educación en estos temas. A pesar de que se han realizado esfuerzos para adaptar la educación a modalidades virtuales, muchos estudiantes, especialmente en áreas rurales, han quedado excluidos de estas iniciativas. Por lo tanto, es crucial que el Estado y las instituciones educativas redoblen esfuerzos para garantizar que la educación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la ciudadanía global se implemente de manera efectiva y accesible para todos los estudiantes en Honduras.

Condiciones de infraestructura educativa

Los avances han sido limitados y desiguales. De acuerdo con el informe de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA, 2022), se han identificado iniciativas para mejorar la infraestructura escolar, con un total de 1,002 centros educativos mejorados en 2023. Sin embargo, el índice de calidad de las infraestructuras educativas se sitúa en un 49.45%, lo que indica que muchas escuelas aún carecen de condiciones adecuadas para un aprendizaje efectivo (Foro Dakar Honduras, 2023). Esto resalta la necesidad de continuar invirtiendo en la infraestructura educativa para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y adecuado.

A pesar de los esfuerzos realizados, los desafíos en la infraestructura educativa son significativos. El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ, 2022) señala que de los 17,525 planteles educativos en Honduras, 14,188 se encuentran en condiciones precarias, lo que limita el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y espacios seguros para el aprendizaje. Alexis Ordoñez (2024) destaca que, aunque en 2022 se repararon 856 centros y se reconstruyeron 226, representando un promedio de tres centros educativos intervenidos por día, estos esfuerzos aún no son suficientes para cerrar la brecha de infraestructura en el país. La falta de inversión sostenida y estructurada sigue afectando gravemente la calidad educativa, especialmente en las zonas rurales.

Esta situación se ve agravada por la ausencia de un plan de acción claro para el mantenimiento y mejora de las instalaciones educativas, lo que afecta directamente la calidad de la educación que reciben los estudiantes (FEREMA, 2022). Ordoñez (2024) también señala que, a pesar de un ligero aumento en el presupuesto educativo en valores absolutos, este ha disminuido proporcionalmente en relación con el Presupuesto General de la República, lo que refleja una tendencia a priorizar gastos operativos sobre inversiones en infraestructura.

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los problemas de infraestructura educativa en Honduras. Durante el cierre de escuelas, se evidenció la falta de recursos tecnológicos y de conectividad en muchas instituciones, lo que impidió la continuidad del aprendizaje para un gran número de estudiantes (Foro Dakar Honduras, 2023). Además, la falta de inversión en infraestructura ha llevado a que muchas escuelas no estén preparadas para implementar modelos de educación híbrida o a distancia, lo que limita aún más las oportunidades educativas para los estudiantes, especialmente en áreas rurales y marginadas (ASJ, 2022). Ordoñez (2024) subraya que las condiciones precarias y la falta de conectividad siguen siendo un obstáculo crítico para la educación en el país.

Por lo tanto, es fundamental que el gobierno y las instituciones educativas prioricen la mejora de la infraestructura escolar para garantizar un acceso equitativo y de calidad a la educación.

Disponibilidad y acceso a becas para estudios superiores

De acuerdo con el informe de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA, 2022), se han destinado aproximadamente 772 millones de lempiras para becas universitarias y otros niveles educativos. Sin embargo, el acceso a estas becas a menudo está condicionado por factores políticos y socioeconómicos, lo que limita su efectividad en la promoción de la equidad educativa (ASJ, 2022). Esto indica que, aunque hay recursos disponibles, la distribución y el acceso a estos fondos no son equitativos.

A pesar de los esfuerzos para aumentar la disponibilidad de becas, el informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ, 2022) destaca que solo un pequeño porcentaje de estudiantes de familias de bajos ingresos logra acceder a estas oportunidades. En 2021, se reportó que más de 700,000 jóvenes entre 18 y 24 años no estaban matriculados en ninguna institución de educación superior, lo que refleja una brecha significativa en el acceso a la educación terciaria (Foro Dakar Honduras, 2023). Esta situación se ve agravada por la falta de información sobre las becas disponibles y los requisitos para acceder a ellas, lo que limita la capacidad de los estudiantes para aprovechar estas oportunidades.

Además, la pandemia de COVID-19 ha impactado negativamente en la disponibilidad de becas y en el acceso a la educación superior. Durante este período, muchas familias enfrentaron dificultades económicas que afectaron su capacidad para financiar la educación de sus hijos, incluso con la ayuda de becas (FEREMA, 2022). Esto ha llevado a un aumento en la deserción escolar y a una disminución en la matrícula en instituciones de educación superior. Por lo tanto, es crucial que el gobierno y las instituciones educativas implementen políticas que no solo aumenten la disponibilidad de becas, sino que también aseguren que estas sean accesibles y equitativas para todos los estudiantes, especialmente aquellos de contextos vulnerables (ASJ, 2022).

Formación y desarrollo profesional para docentes

Basado en el informe de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA, 2022), se han implementado programas de formación continua que han permitido a un número considerable de educadores obtener títulos universitarios en el área educativa. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, solo el 20% de los docentes de educación pre básica cuenta

con formación superior, lo que indica que aún hay un largo camino por recorrer para alcanzar la meta del 88% de docentes de educación básica con título superior (Foro Dakar Honduras, 2023).

Ordoñez (2024) subraya que, aunque se ha realizado una inversión importante en programas de formación docente, persisten deficiencias significativas. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) ha incrementado su presupuesto en un 10.5% para promover la formación docente, pero la matrícula en estos programas ha disminuido un 11.8% en comparación con años anteriores. Esto pone de manifiesto que, a pesar de los recursos asignados, la demanda y participación en programas de formación no han sido suficientes para satisfacer las necesidades del sistema educativo.

A pesar de los avances en la capacitación docente, persisten desafíos significativos en la calidad de la formación. El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ, 2022) destaca que muchos docentes no reciben la formación adecuada para enfrentar las necesidades de una población estudiantil diversa. Además, la falta de programas de formación continua y actualización impacta negativamente en la calidad de la enseñanza. Ordoñez (2024) también señala que la relación docente-estudiante ha mejorado levemente, bajando de 14.2 estudiantes por docente en 2021 a 12.9 en 2022, pero esta mejora no se ha traducido en un impacto significativo en la calidad educativa, ya que la formación sigue siendo insuficiente y fragmentada.

La pandemia de COVID-19 también ha exacerbado los desafíos en la formación y desarrollo profesional de los docentes. Durante este período, muchos educadores enfrentaron dificultades para acceder a capacitación en nuevas metodologías de enseñanza y en el uso de tecnologías educativas, lo que limitó su capacidad para adaptarse a la educación a distancia (FEREMA, 2022). Esto ha llevado a una brecha en la calidad educativa, ya que los docentes no están completamente preparados para enfrentar los retos que presenta un entorno educativo cambiante. Ordoñez (2024) enfatiza que es crucial invertir en la capacitación tecnológica y metodológica de los docentes para cerrar esta brecha y mejorar la capacidad de adaptación del sistema educativo.

Por lo tanto, es crucial que el gobierno y las instituciones educativas prioricen la formación continua y el desarrollo profesional de los docentes, asegurando que estén equipados con las herramientas necesarias para brindar una educación de calidad a todos los estudiantes (ASJ, 2022).

Parte 3

Avances, obstáculos y desafíos

¿Cuáles fueron los principales desafíos de la educación en el país en 2015 y si se han resuelto o se han reportado avances al 2023?

En 2015, la educación en Honduras enfrentaba desafíos estructurales profundos que afectaban tanto la cobertura como la calidad educativa, así como la infraestructura y la formación docente. Uno de los problemas más críticos era la baja cobertura en la educación secundaria, con una tasa de matrícula de solo el 55%, lo que dejaba a una gran parte de los adolescentes fuera del sistema educativo. Este desafío estaba estrechamente ligado a las barreras geográficas y económicas, particularmente en las zonas rurales, donde la distancia a los centros educativos y la falta de recursos financieros dificultaban el acceso (Duriez et al., 2016). Además, la calidad de la educación era preocupante, con evaluaciones que mostraban que más del 60% de los estudiantes no alcanzaban niveles satisfactorios en competencias básicas como matemáticas y lectura (FOSDEH, 2022).

La infraestructura educativa también presentaba serias deficiencias. Muchas escuelas operaban en condiciones inadecuadas, sin acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, y con instalaciones físicas deterioradas. Estas condiciones afectaban directamente la calidad del aprendizaje y la seguridad de los estudiantes (Romero, 2024). Además, la formación docente era insuficiente, con muchos maestros que no recibían capacitación continua, lo que limitaba su capacidad para mejorar sus prácticas pedagógicas y adaptarse a las nuevas demandas educativas (Foro Dakar Honduras, 2020).

Para 2023, algunos de estos desafíos han mostrado avances, aunque otros persisten o incluso se han agravado. La pandemia de COVID-19 exacerbó las dificultades del sistema educativo, especialmente en términos de exclusión. Mientras que en 2014 había aproximadamente 873 mil niños y adolescentes fuera del sistema educativo, para 2022 esta cifra aumentó a más de un millón, evidenciando un retroceso significativo en la cobertura (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023). A pesar de los esfuerzos gubernamentales, como la reintroducción de la matrícula gratis y la merienda escolar, estos programas no han logrado revertir completamente la tendencia de exclusión educativa (Romero, 2024).

En cuanto a la calidad educativa, los datos de 2019 indicaron que el 81% de los estudiantes de tercero, sexto y noveno grado tenían un rendimiento insatisfactorio en matemáticas, y el 61% en lectura. Estos resultados sugieren que la calidad de la educación no solo no ha mejorado desde 2015, sino que probablemente se ha deteriorado aún más debido al impacto de la pandemia y la prolongada interrupción de las clases presenciales (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023).

En el ámbito de la infraestructura, el panorama sigue siendo desalentador. Aunque ha habido algunos incrementos en la inversión en merienda escolar y en programas de matrícula gratis, la inversión en infraestructura educativa sigue siendo insuficiente. En 2022, la inversión en infraestructura educativa representó menos del 1% del presupuesto total de educación, lo que apenas alcanzó para construir unas pocas escuelas nuevas, dejando la mayoría de los centros educativos en condiciones críticas (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023).

En cuanto a la formación docente, se han reportado algunos avances, como la reapertura de las Escuelas Normales en 2023 para fortalecer la formación inicial de maestros. Sin embargo, persisten problemas de calidad y equidad en la formación continua, especialmente en zonas rurales, donde los docentes siguen enfrentando barreras significativas para acceder a oportunidades de desarrollo profesional (Foro Dakar Honduras, 2020).

La ratificación del Estado a la Agenda 2030 y, específicamente, al ODS 4: ¿implica una transformación o el inicio de un camino hacia la transformación del sistema de educación pública en Honduras?

La ratificación de Honduras a la Agenda 2030 y, específicamente, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), representa un compromiso significativo que, en teoría, debería impulsar la transformación del sistema de educación pública del país. El ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Desde su adopción en 2015, Honduras ha avanzado en la alineación de su marco institucional y políticas educativas con los objetivos establecidos en la Agenda 2030, aunque los resultados han sido mixtos y desiguales.

Desde el principio, Honduras ha intentado integrar la Agenda 2030 dentro de sus planes nacionales de desarrollo, como la Visión de País y el Plan de Nación. El “Examen Nacional para la Revisión Voluntaria” de 2017 muestra que se sentaron las bases para implementar la Agenda 2030 mediante la creación de comisiones de alto nivel y técnicas encargadas de la gobernanza de los ODS, incluyendo la socialización de la agenda en diferentes niveles del gobierno y sectores de la sociedad civil (Secretaría de Coordinación General de Gobierno, 2017). Estas acciones iniciales eran necesarias para establecer un marco de referencia claro y una estructura organizativa que facilitara la implementación de los ODS, incluyendo el ODS 4.

A pesar de estos esfuerzos, los avances en la transformación del sistema educativo han sido limitados. Según el Informe Sombra de 2020, los desafíos estructurales en el sector educativo, como la baja calidad de la enseñanza, la infraestructura inadecuada y la falta de formación continua para los docentes, han persistido a lo largo de los años, limitando el impacto de las políticas basadas en la Agenda 2030 (Foro Dakar Honduras, 2020). Aunque se han implementado programas y proyectos para mejorar la calidad educativa, estos no han logrado revertir las tendencias negativas de exclusión y baja calidad en la educación.

La pandemia de COVID-19 también tuvo un impacto profundo en la educación, exacerbando las desigualdades y limitando el acceso a la educación, especialmente para las comunidades rurales y marginadas. Según el Boletín de Educación de 2023, la pandemia llevó a un aumento en la deserción escolar y a un deterioro en los resultados de aprendizaje, lo que demuestra que los avances hacia

los objetivos del ODS 4 han sido insuficientes para enfrentar desafíos imprevistos y crisis (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023).

Por otro lado, ha habido algunos avances positivos. El “II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030” de 2020 destacó que, aunque los desafíos siguen siendo grandes, la integración del desarrollo sostenible en la currícula educativa ha comenzado a tomar forma, lo cual es un paso importante hacia una transformación más amplia del sistema educativo (Secretaría de Coordinación General de Gobierno, 2020). Sin embargo, la implementación de estas iniciativas ha sido lenta y desigual, dependiendo en gran medida del apoyo internacional y la voluntad política a nivel nacional.

¿La agenda 2030 y la incorporación del ODS4 representó también una inclusión más amplia e igualitaria de los grupos marginados históricamente en el país?

La ratificación de la Agenda 2030 y la inclusión del ODS 4 en Honduras representaron un compromiso para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Sin embargo, la pregunta central es si este compromiso ha resultado en una inclusión más amplia e igualitaria de los grupos históricamente marginados en el país. A pesar de algunos esfuerzos, los avances han sido limitados y desiguales, lo que revela la persistencia de profundas brechas en la educación.

Históricamente, los niveles de exclusión educativa en Honduras han sido elevados, especialmente entre los grupos más vulnerables, como los niños y jóvenes de áreas rurales, indígenas, afrodescendientes y aquellos en situación de pobreza extrema. En 2015, el sistema educativo hondureño ya mostraba serias deficiencias en la inclusión de estos grupos. La pobreza, la falta de infraestructura educativa adecuada y la desigualdad en el acceso a los recursos educativos contribuyeron a una alta tasa de deserción escolar y a una baja tasa de finalización de estudios, particularmente en las zonas rurales y entre las comunidades marginadas (Asociación para una Sociedad más Justa, 2022).

La pandemia de COVID-19 exacerbó estas desigualdades, profundizando la exclusión educativa. En 2022, el número de niños y adolescentes fuera del sistema educativo había aumentado a más de un millón, una cifra alarmante que indica un retroceso en los esfuerzos por incluir a los grupos marginados en el sistema educativo (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023). La falta de acceso a tecnología y conectividad durante la pandemia dejó a muchos estudiantes en áreas rurales sin posibilidad de continuar sus estudios, lo que afectó de manera desproporcionada a los grupos históricamente excluidos (Asociación para una Sociedad más Justa, 2022).

Aunque la inclusión de los principios del ODS 4 en las políticas educativas de Honduras pretendía abordar estas desigualdades, la realidad es que los avances han sido limitados. A pesar de algunas iniciativas, como la reintroducción de la matrícula gratis y la merienda escolar, estos programas no han sido suficientes para contrarrestar las profundas desigualdades en el acceso a la educación. Los grupos marginados continúan enfrentando barreras significativas, como la falta de escuelas en sus comunidades, el costo indirecto de la educación y la necesidad de contribuir al ingreso familiar, lo que les impide acceder a una educación de calidad (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023).

El informe del Foro Dakar de 2020 también subraya la falta de un enfoque inclusivo que responda a las necesidades específicas de los grupos marginados. Aunque el marco legal y los compromisos internacionales de Honduras destacan la importancia de la educación inclusiva, en la práctica, estos compromisos no se han traducido en políticas efectivas que lleguen a las comunidades más vulnerables (Foro Dakar Honduras, 2020).

Avances que se han visto en el país en los años 2016, 2018, 2020, 2022 y 2023 en cuanto al ODS4

Desde 2016, Honduras ha mostrado avances en la implementación del ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Estos avances se han reflejado en varias áreas clave, incluyendo el acceso, la calidad, la gratuidad y la igualdad de oportunidades en la educación.

Uno de los avances más significativos ha sido la implementación de políticas orientadas a mejorar el acceso y la inclusión educativa. En 2018, el país continuó con la implementación de la matrícula gratis y la merienda escolar, programas que han sido fundamentales para aumentar la matrícula y reducir la exclusión educativa. Estos programas han sido sostenidos y fortalecidos en los años siguientes, logrando que, entre 2022 y 2023, se incorporaran 34,341 niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, una recuperación del 3% en la tasa de exclusión escolar (Romero, 2024).

La calidad de la educación también ha sido una prioridad, aunque los desafíos en este ámbito persisten. Desde 2016, se han realizado esfuerzos para mejorar la formación docente y la infraestructura educativa. En 2023, la reapertura de las Escuelas Normales, que están orientadas a la formación de maestros, representa un avance significativo en la mejora de la calidad educativa, ya que estas instituciones se centran en formar docentes con un enfoque moderno y pertinente para las necesidades actuales del sistema educativo (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023). Además, la inclusión de Honduras en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2025) de la UNESCO es un paso importante para evaluar y mejorar la calidad de los aprendizajes en el país.

En cuanto a la gratuidad de la educación, el gobierno ha mantenido y ampliado los programas de matrícula gratis, lo que ha permitido que un mayor número de familias vulnerables puedan enviar a sus hijos a la escuela sin incurrir en gastos adicionales. Este esfuerzo ha sido complementado con la inversión en merienda escolar, que se triplicó en 2023 en comparación con el año anterior, convirtiéndose en un incentivo clave para aumentar la matrícula y mantener a los estudiantes en la escuela (Romero, 2024).

La igualdad de oportunidades también ha sido un enfoque central en los avances relacionados con el ODS 4. Si bien persisten desigualdades, especialmente entre áreas urbanas y rurales, se han hecho esfuerzos para mejorar la infraestructura en zonas marginadas y para garantizar que los programas de apoyo, como la merienda escolar, lleguen a las comunidades más necesitadas. Aunque la infraestructura educativa en muchas áreas sigue siendo un desafío, en 2023 se ejecutaron L 409.8 millones adicionales en infraestructura educativa en comparación con 2022, lo que demuestra un compromiso creciente por parte del gobierno en mejorar las condiciones físicas de las escuelas (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023).

Desafíos actuales para el alcance del ODS4

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, Honduras enfrenta desafíos significativos para alcanzar el ODS 4. Estos desafíos son complejos y multifacéticos, afectando directamente la cobertura, la calidad, la equidad y la sostenibilidad del sistema educativo en el país.

Uno de los mayores desafíos actuales es la alta tasa de exclusión educativa, especialmente en los niveles de educación preescolar y secundaria. Según el Estado de País 2024, aunque se han hecho esfuerzos por reducir la exclusión, más de un millón de niños y adolescentes seguían fuera del sistema educativo en 2023, lo que representa una barrera significativa para el alcance del ODS 4 (Romero, 2024). La pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación, dificultando el retorno de muchos estudiantes al sistema educativo y aumentando las desigualdades preexistentes.

En términos de calidad educativa, Honduras también enfrenta serios desafíos. La baja calidad del aprendizaje es evidente en los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. El Informe de Progreso Educativo 2022 señala que más del 60% de los estudiantes de tercer, sexto y noveno grado tienen un desempeño insatisfactorio en matemáticas y lectura (FEREMA, 2022). Estos bajos niveles de desempeño académico reflejan las deficiencias en la formación de los docentes, la falta de recursos educativos adecuados y la escasez de infraestructura escolar, especialmente en áreas rurales y marginadas. Además, el Estado de País 2024 resalta que la falta de participación en evaluaciones internacionales recientes impide medir con precisión la situación de los aprendizajes y dificulta la formulación de estrategias efectivas para mejorar la calidad educativa (Romero, 2024).

Otro desafío importante es la equidad en el acceso a la educación. Aunque se han implementado políticas de gratuidad educativa, como la matrícula gratis y la merienda escolar, estas medidas no han sido suficientes para cerrar la brecha entre los estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. La Investigación sobre la Gratuidad subraya que, si bien estos programas han aliviado parte de la carga económica para las familias, aún persisten barreras significativas que impiden que los estudiantes más vulnerables accedan a una educación de calidad (Foro Dakar Honduras, 2023). Estas barreras incluyen costos indirectos, como transporte y materiales, así como la falta de infraestructura adecuada en las zonas más necesitadas.

Finalmente, la sostenibilidad financiera es un reto crucial para alcanzar el ODS 4 en Honduras. A pesar del aumento en la inversión educativa en áreas como la merienda escolar y la infraestructura, la asignación presupuestaria sigue siendo insuficiente para abordar todos los desafíos del sistema educativo. Según el Estado de País 2024, aunque hubo un incremento en la inversión en infraestructura educativa en 2023, la mayoría de las escuelas del país siguen en condiciones críticas, lo que afecta directamente la calidad del aprendizaje y la seguridad de los estudiantes (Romero, 2024).

Mejoras en acceso, calidad, gratuidad e igualdad en los últimos 5 años

En los últimos cinco años, Honduras ha implementado una serie de iniciativas con el objetivo de mejorar el acceso, la calidad, la gratuidad y la igualdad en la educación, en línea con los compromisos adquiridos en el marco del ODS 4 de la Agenda 2030. Estos esfuerzos han generado avances

significativos en algunos aspectos clave del sistema educativo, aunque persisten desafíos que limitan el impacto total de estas mejoras.

En términos de acceso, uno de los logros más destacados ha sido la expansión de la matrícula gratuita y la continuidad de programas como la merienda escolar. Estas políticas han sido fundamentales para incrementar la inscripción y reducir la tasa de deserción escolar, particularmente en las zonas rurales y entre las poblaciones más vulnerables. Según el Estado de País 2024, estas iniciativas contribuyeron a que, entre 2022 y 2023, se incorporaran más de 34,000 niños y adolescentes al sistema educativo, lo que representa una mejora del 3% en la tasa de exclusión escolar (Romero, 2024). Este avance es especialmente significativo en un contexto donde la pandemia de COVID-19 había exacerbado la exclusión educativa, demostrando la eficacia de los programas de apoyo estatal en la recuperación de la matrícula escolar.

En cuanto a la calidad de la educación, Honduras ha realizado esfuerzos para mejorar la formación docente y actualizar el currículo, aunque los resultados han sido mixtos. La reapertura de las Escuelas Normales en 2023, enfocadas en la formación inicial de maestros, es un paso crucial hacia la mejora de la calidad educativa, ya que estas instituciones están diseñadas para preparar a los docentes con enfoques pedagógicos modernos y adaptados a las necesidades actuales del sistema educativo (Asociación para una Sociedad más Justa, 2023). Además, la inclusión de Honduras en evaluaciones internacionales, como el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la UNESCO, permite al país medir y comparar los resultados educativos con otros países de la región, facilitando la identificación de áreas de mejora y el diseño de políticas más efectivas.

La gratuidad en la educación ha sido un componente clave de las políticas educativas en Honduras, particularmente en los últimos años. Programas como la matrícula gratuita y la merienda escolar han aliviado significativamente la carga económica de las familias, especialmente aquellas en situación de pobreza. La Investigación sobre la Gratuidad subraya que estas políticas han tenido un impacto positivo al reducir los costos asociados con la educación, permitiendo que más niños y jóvenes permanezcan en el sistema escolar (Foro Dakar Honduras, 2023). Sin embargo, aunque la gratuidad ha mejorado el acceso, aún persisten desafíos relacionados con los costos indirectos de la educación, como el transporte y los materiales escolares, que continúan siendo una barrera para los estudiantes más vulnerables.

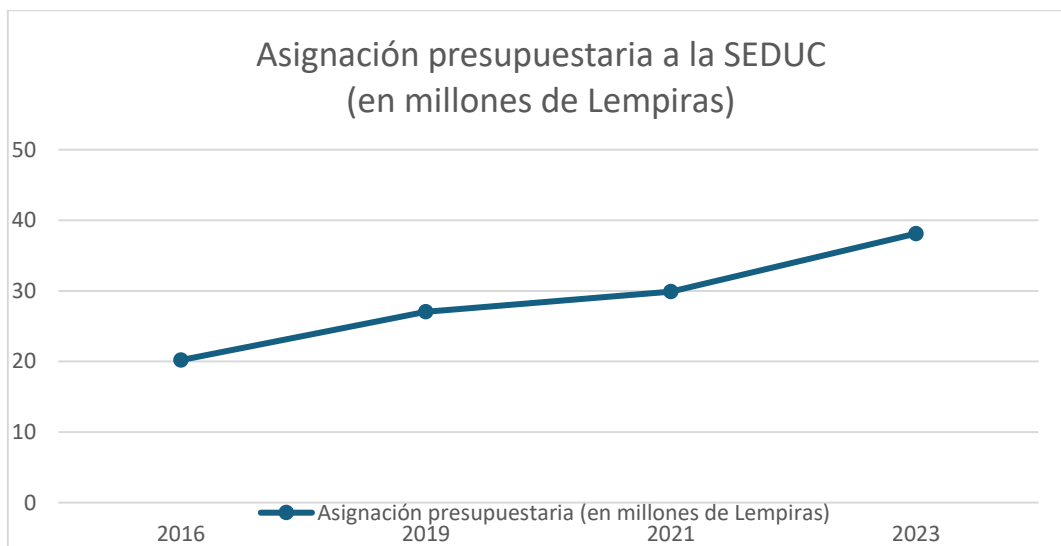
En términos de igualdad, Honduras ha avanzado en la implementación de políticas que buscan reducir las disparidades en el acceso y la calidad de la educación entre diferentes grupos socioeconómicos y regiones geográficas. Programas dirigidos a mejorar la infraestructura escolar en áreas rurales y marginales, aunque aún insuficientes, han contribuido a reducir la brecha educativa. Según el Estado de País 2024, se ha incrementado la inversión en infraestructura educativa, con un aumento notable en los recursos destinados a la construcción y mejora de escuelas en 2023, lo que ha mejorado las condiciones de aprendizaje para miles de estudiantes en zonas vulnerables (Romero, 2024).



¿Es el financiamiento un factor que impide el avance del ODS4 en el país en sus diferentes modalidades y niveles?

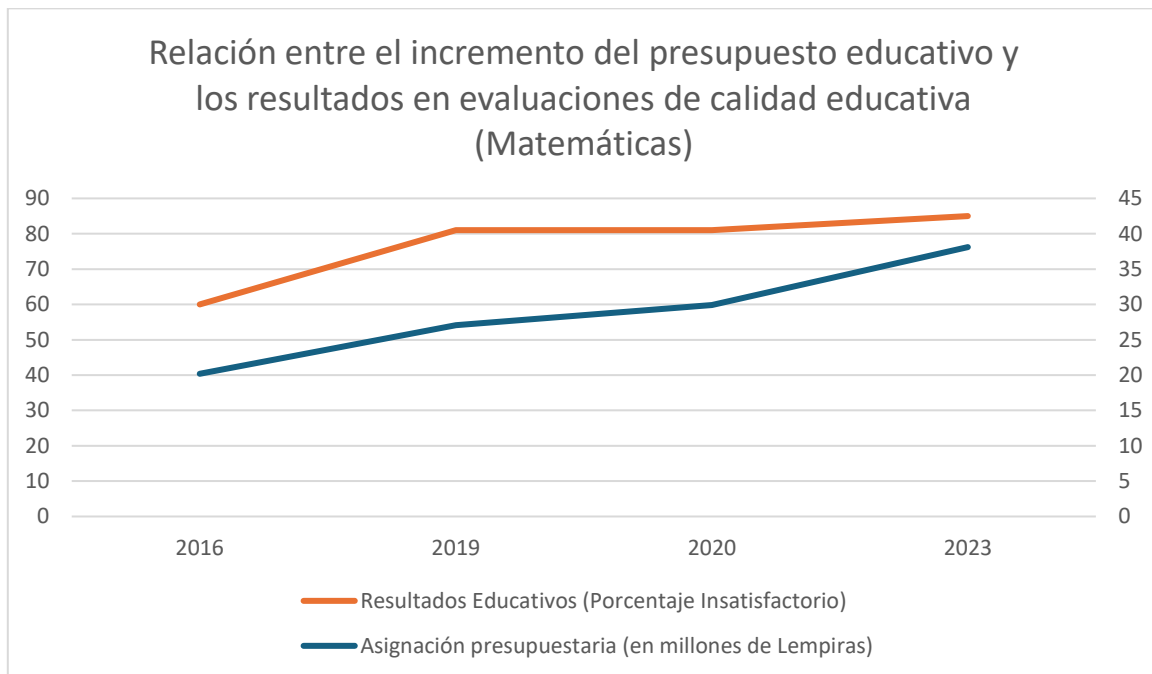
El financiamiento es, sin duda, un factor crítico que afecta significativamente el avance del ODS 4 en Honduras, particularmente en sus diferentes modalidades y niveles educativos. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para incrementar el presupuesto destinado al sector educativo, las limitaciones financieras y la ineficiente ejecución de los recursos han sido barreras importantes que impiden un progreso sostenido y significativo en la educación.

En términos generales, el presupuesto destinado a la educación ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, el Presupuesto Ciudadano 2023 señala un incremento en la asignación para infraestructura educativa y programas como la matrícula gratuita y la merienda escolar (Secretaría de Finanzas de Honduras, 2023). Sin embargo, estos incrementos no han sido suficientes para cubrir las necesidades reales del sistema educativo, especialmente en lo que respecta a la mejora de la calidad educativa y la equidad en el acceso.



Uno de los principales problemas es la baja ejecución presupuestaria, que ha sido un obstáculo constante en la implementación efectiva de proyectos educativos. Según el Informe del IV Trimestre de 2022 de la Secretaría de Educación, solo se ejecutó el 27% del presupuesto destinado a proyectos de infraestructura educativa, lo que refleja una subutilización significativa de los recursos disponibles (Secretaría de Educación de Honduras, 2022). Esta baja ejecución se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional dentro de la Secretaría de Educación para gestionar y ejecutar eficientemente los proyectos financiados tanto por recursos nacionales como por créditos externos.

Además, la dependencia de Honduras en financiamiento externo para proyectos educativos también presenta desafíos. Un alto porcentaje de los fondos para la educación proviene de préstamos y donaciones de organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Alemán de Desarrollo (KfW). Aunque este financiamiento es esencial para la implementación de proyectos clave, como el mejoramiento de la infraestructura escolar, la falta de sinergia entre las entidades ejecutoras nacionales y los organismos internacionales ha causado retrasos y dificultades en la ejecución de estos proyectos (Secretaría de Educación de Honduras, 2022). Esto sugiere que, aunque el financiamiento externo es crucial, no puede compensar las deficiencias estructurales y de capacidad interna que limitan el uso efectivo de estos recursos.



La sostenibilidad financiera a largo plazo también es un tema crítico. Si bien se han incrementado los fondos destinados a programas específicos, como la gratuidad educativa y la merienda escolar, la inversión en otros aspectos esenciales como la formación docente y la actualización curricular sigue siendo insuficiente (Secretaría de Finanzas de Honduras, 2023). La falta de una planificación financiera estratégica que aborde tanto las necesidades inmediatas como los desafíos a largo plazo del sistema educativo limita la capacidad del país para realizar avances significativos hacia el ODS 4.

Conclusiones

La implementación ODS 4 en Honduras ha sido un esfuerzo continuo, marcado tanto por avances significativos como por desafíos persistentes que limitan el logro pleno de sus metas. El ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, es fundamental para el desarrollo del país, dado que la educación es uno de los pilares esenciales para romper el ciclo de la pobreza y promover el desarrollo económico y social. En los últimos años, el gobierno hondureño ha incrementado de manera notable la asignación presupuestaria al sector educativo, reflejando un compromiso financiero hacia el logro de este objetivo. Sin embargo, a pesar de estos incrementos, la ejecución efectiva de estos fondos ha enfrentado varios obstáculos, lo que ha impedido que los recursos asignados se traduzcan en mejoras sustanciales en la calidad educativa y la equidad en el acceso a la educación.

Uno de los avances más notables en la implementación del ODS 4 ha sido la expansión de la matrícula gratuita y la continuidad de programas como la merienda escolar. Estas políticas han sido fundamentales para aumentar la tasa de matrícula y reducir la deserción escolar, especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones más vulnerables. En particular, la reincorporación de más de 34,000 niños y adolescentes al sistema educativo entre 2022 y 2023 representa un avance significativo, reflejando la eficacia de estos programas en mitigar el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en la educación. Además, la reapertura de las Escuelas Normales en 2023 marca un paso importante hacia la mejora de la calidad de la formación docente, un factor crucial para elevar los estándares educativos en el país.

A pesar de estos avances, los desafíos financieros y estructurales persisten, limitando el impacto de las políticas implementadas. Un problema recurrente ha sido la baja ejecución presupuestaria. Aunque el presupuesto destinado al sector educativo ha aumentado constantemente, con un salto notable a L 38,109 millones en 2023, la capacidad del gobierno para ejecutar estos recursos de manera eficiente sigue siendo limitada. Solo una fracción del presupuesto asignado a infraestructura educativa y programas de mejora de la calidad ha sido utilizada, lo que ha restringido el impacto potencial de estos incrementos presupuestarios. Este problema de ejecución se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional dentro de la Secretaría de Educación, así como a la complejidad de coordinar y gestionar proyectos financiados con recursos externos, lo que ha llevado a retrasos significativos en la implementación de iniciativas clave.

Además de la baja ejecución presupuestaria, la dependencia de Honduras en el financiamiento externo para proyectos educativos presenta un desafío adicional. Aunque estos fondos son esenciales para la implementación de proyectos importantes, como el mejoramiento de la infraestructura escolar y la modernización del currículo, la falta de sinergia entre las entidades nacionales e internacionales ha dificultado la ejecución de estos proyectos. Esto ha generado una situación en la que, a pesar de contar con los recursos financieros, el impacto real de estos fondos en la mejora del sistema educativo es limitado. Esta dependencia del financiamiento externo también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las mejoras en la educación, especialmente si no se fortalecen las capacidades internas para gestionar estos recursos de manera más efectiva.

La calidad de la educación sigue siendo un área de gran preocupación. A pesar de los esfuerzos por mejorar la formación docente y actualizar el currículo, los resultados educativos no han mostrado mejoras sustanciales. Los datos disponibles indican que más del 80% de los estudiantes de tercer, sexto y noveno grado continúan teniendo un rendimiento insatisfactorio en matemáticas y lectura, un indicador claro de que los recursos asignados no se están traduciendo en mejoras tangibles en el aprendizaje. Este problema se agrava en las zonas rurales, donde los docentes enfrentan mayores desafíos debido a la falta de acceso a formación continua y recursos educativos adecuados. La reapertura de las Escuelas Normales es un paso en la dirección correcta, pero es necesario un enfoque más integral que incluya un aumento en la inversión en la formación continua de los docentes y en la provisión de recursos pedagógicos que apoyen una enseñanza de calidad en todos los niveles.

La equidad en el acceso a la educación es otro desafío persistente. Aunque la gratuidad educativa ha aliviado la carga económica de muchas familias, las desigualdades siguen siendo pronunciadas, particularmente entre las comunidades rurales y urbanas. Las barreras económicas, como los costos indirectos de la educación (transporte, materiales escolares), y las barreras estructurales, como la falta de infraestructura adecuada, continúan limitando el acceso a una educación de calidad para los estudiantes más vulnerables. A pesar del aumento en la inversión en infraestructura educativa en 2023, la mayoría de las escuelas del país siguen en condiciones críticas, afectando directamente la calidad del entorno de aprendizaje y perpetuando las desigualdades en el acceso a la educación.

En términos de sostenibilidad, el enfoque en la financiación a corto plazo sin una planificación estratégica a largo plazo representa un riesgo significativo. Aunque los incrementos presupuestarios recientes son un signo positivo, es crucial que estos recursos se utilicen de manera más eficiente y que se fortalezca la planificación financiera a largo plazo para garantizar que las mejoras en la educación sean sostenibles. Esto incluye no solo la inversión en infraestructura y programas de apoyo, sino también en la construcción de capacidades dentro de las instituciones educativas para gestionar estos recursos de manera efectiva.

Recomendaciones

Para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y sus metas en Honduras, es fundamental implementar una serie de estrategias que aborden tanto los desafíos financieros como los estructurales que actualmente limitan el avance del sistema educativo. En primer lugar, es crucial mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto destinado a la educación. Aunque ha habido un incremento en la asignación de recursos financieros al sector educativo en los últimos años, la baja capacidad de ejecución ha impedido que estos fondos se traduzcan en mejoras tangibles en la calidad y el acceso a la educación. Para resolver este problema, es necesario fortalecer las capacidades institucionales dentro de la Secretaría de Educación, mediante la formación continua de su personal en gestión financiera y la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación más robustos que permitan un seguimiento más riguroso de la ejecución presupuestaria. Asimismo, se debe promover una mayor transparencia en la gestión de los recursos, lo que podría lograrse a través de la creación de plataformas públicas que permitan a la sociedad civil y a otros actores interesados monitorear el uso de los fondos educativos en tiempo real.

Otro aspecto clave para avanzar hacia el cumplimiento del ODS 4 es la mejora en la formación y el desarrollo profesional de los docentes. La calidad de la educación depende en gran medida de la capacidad de los maestros para impartir conocimientos de manera efectiva y adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno educativo. Para ello, es esencial que se inviertan más recursos en la capacitación continua de los docentes, con un enfoque en nuevas metodologías pedagógicas, el uso de tecnologías en la enseñanza y la atención a la diversidad en las aulas. Además, se deben establecer incentivos claros para los docentes que participen en programas de desarrollo profesional, asegurando que estos se mantengan actualizados y motivados para mejorar su desempeño en el aula. La reapertura de las Escuelas Normales en 2023 fue un paso positivo, pero es necesario complementar esta iniciativa con un enfoque más amplio que incluya la creación de centros regionales de formación docente, donde los maestros puedan acceder a recursos y formación sin necesidad de desplazarse largas distancias.

La inversión en infraestructura educativa también es una prioridad para alcanzar el ODS 4. Muchas escuelas en Honduras aún operan en condiciones inadecuadas, lo que afecta negativamente la calidad del aprendizaje y la seguridad de los estudiantes. Para abordar este desafío, se requiere un plan de inversión a largo plazo que priorice la construcción y rehabilitación de escuelas en las áreas más necesitadas, especialmente en las zonas rurales y marginales. Este plan debe incluir no solo la construcción de nuevas instalaciones, sino también el mantenimiento regular de las existentes, garantizando que todas las escuelas cuenten con acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento. Además, es fundamental que estas inversiones se realicen de manera equitativa, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, tengan acceso a un entorno de aprendizaje seguro y adecuado.

La equidad en el acceso a la educación es otro aspecto que requiere atención urgente. A pesar de las políticas de gratuidad educativa, como la matrícula gratis y la merienda escolar, persisten desigualdades significativas entre los estudiantes de diferentes regiones y contextos socioeconómicos. Para reducir estas brechas, se deben implementar políticas más inclusivas que consideren las necesidades específicas de los grupos más vulnerables. Esto podría incluir la provisión de apoyo financiero adicional para cubrir los costos indirectos de la educación, como el transporte y los materiales escolares, que a menudo representan una barrera para las familias más pobres. Además, es importante que se desarrollen programas educativos específicos para atender a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como a los estudiantes con discapacidades, garantizando que todos los niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad.

El financiamiento de la educación es, sin duda, un elemento central en la consecución del ODS 4. Aunque Honduras ha incrementado su inversión en el sector educativo, es necesario asegurar que esta inversión sea sostenible a largo plazo. Para ello, es crucial que el gobierno diversifique sus fuentes de financiamiento, explorando alternativas como alianzas público-privadas, fondos internacionales y la cooperación con organizaciones no gubernamentales. Asimismo, se debe optimizar el uso de los recursos existentes, priorizando aquellos programas y proyectos que han demostrado ser más efectivos en mejorar la calidad educativa y reducir las desigualdades. La creación de un fondo de contingencia para la educación podría ser una estrategia útil para asegurar la estabilidad financiera del sector en tiempos de crisis, como la experimentada durante la pandemia de COVID-19.

Para asegurar que los avances hacia el ODS 4 sean sostenibles, es necesario fortalecer la planificación y la coordinación interinstitucional. La educación no puede ser vista como un sector aislado; requiere la colaboración de múltiples actores, incluidos otros ministerios, gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil. Es fundamental que se establezcan mecanismos de coordinación efectiva que permitan alinear las políticas educativas con otras políticas públicas, como las de salud, desarrollo social y empleo. Además, se debe promover una mayor participación de la comunidad en la gestión de las escuelas, empoderando a los padres, estudiantes y líderes comunitarios para que contribuyan activamente al mejoramiento de la calidad educativa en sus localidades.

Por último, es vital que se fortalezcan los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas en el sector educativo. Para garantizar que las políticas implementadas estén teniendo el impacto deseado, es necesario contar con sistemas de evaluación rigurosos que midan no solo los resultados educativos, sino también la eficiencia en el uso de los recursos y la equidad en la distribución de los beneficios educativos. La implementación de evaluaciones nacionales periódicas, junto con la participación en evaluaciones internacionales como el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), puede proporcionar datos valiosos para ajustar las políticas y asegurar que se estén alcanzando los objetivos propuestos. Además, se debe fomentar una cultura de rendición de cuentas en todos los niveles del sistema educativo, desde los ministerios hasta las escuelas, asegurando que todos los actores involucrados estén comprometidos con el logro del ODS 4.

Referencias y Bibliografía

- Asociación para una Sociedad más Justa. (2023).** *Estado de País 2023: Educación.* Asociación para una Sociedad más Justa.
- Banco Mundial. (2020).** *Examen Nacional para la Revisión Voluntaria: Honduras y la Agenda 2030.* Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2020).** *Informe de Progreso Educativo: Honduras 2020.* Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2020).** *Sistema de Monitoreo Educativo de Honduras (SIEMH): Resultados preliminares 2020.* Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2022).** *Informe del Sistema Educativo de Honduras: Diagnóstico y Recomendaciones.* Banco Mundial.
- Cáceres Villadares, D. F. (2019).** Política y calidad educativa para el desarrollo humano en Honduras. Honduras.
- CEPAL/UNICEF.** Documento de Asistencia Técnica Ministerio Educación de Honduras
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015).** Situación de derechos humanos en Honduras. CIDH.
- Duriez, M., López, V., & Moncada, G. (2016).** Informe Nacional: Honduras. En *Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2016.*
- Espino, I. (2015).** La Desigualdad Educativa en Honduras. FLACSO Honduras.
- FEREMA. (2017).** Informe de progreso educativo: Honduras 2017. *Educación: Una deuda pendiente.* Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
- FEREMA. (2022).** Informe de Progreso Educativo Honduras. Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu.
- Fondo Social de Desarrollo de Honduras (FOSDEH). (2015).** Desafíos en calidad y cobertura de la educación pública de Honduras 2014-2018. FOSDEH.
- Fondo Social de Desarrollo de Honduras (FOSDEH). (2022).** *Tendencias y desafíos de la educación básica en Honduras: 2015-2020.* FOSDEH.
- Foro Dakar Honduras. (2017).** Informe Sombra 2017. Honduras.
- Foro Dakar Honduras. (2020).** Informe sombra 2020: Los avances del ODS4 en el sector de educación en Honduras, Agenda 2030 "Que nadie se quede atrás".
- Foro Dakar Honduras. (2022).** Informe Sombra 2022. Honduras.
- Foro Dakar Honduras. (2023).** Informe Sombra 2023. *Avances del ODS4 en el Sector Educación en Honduras, Agenda 2030.*
- Gobierno de Honduras. (2020).** *II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030.* Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
- Morazán Irías, J. P. (2017).** Honduras frente a los retos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Honduras. NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES FUERA DE LA ESCUELA EN HONDURAS. Diciembre, 2023
- Paz-Maldonado, E., Flores-Girón, H., & Silva-Peña, I. (2021).** Educación y desigualdad social: El impacto de la pandemia COVID-19 en el sistema educativo público de Honduras. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 29(133). <https://doi.org/10.14507/epaa.29.6290>
- Percy Mejía-Elvir** Universidad Nacional Autónoma de Honduras,, Honduras **Reflexiones de la respuesta educativa ante la Covid-19, caso Honduras** Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. LI, núm. Esp.-, pp. 292-312, 2021. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
- Romero, M. (2024).** *Estado de País 2024: Educación.* Elaborado para la Asociación para una Sociedad más Justa.
- Secretaría de Educación de Honduras. (2015).** Sistema Educativo Hondureño en Cifras: 2015-2017. Secretaría de Educación.
- Secretaría de Educación de Honduras. (2022).** *Informe del IV Trimestre 2022: Ejecución presupuestaria en educación.* Secretaría de Educación.

Secretaría de Educación de Honduras. (2023). *Informe de Avances en la Implementación del ODS4: 2023.*
Secretaría de Educación.

Secretaría de Educación de la República de Honduras, UNESCO. (2019). Revisión de las políticas públicas
educativas en Honduras. Oficina de la UNESCO en San José.

Secretaría de Finanzas de Honduras. (2015). Presupuesto Ciudadano 2015. Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas de Honduras. (2016). Presupuesto Ciudadano 2016. Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas de Honduras. (2019). Presupuesto Ciudadano 2019. Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas de Honduras. (2021). Presupuesto Ciudadano 2021. Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas de Honduras. (2023). Presupuesto Ciudadano 2023. Secretaría de Finanzas.